

	Mrs.	Trimestre.
En Madrid.	10 rs.	30 rs.
En provincias.	12	36
En el extranjero.	21	63
En las Antillas.	21	63
En Filipinas.	21	63

Mientras las atenciones del periódico no lo impidan, se admitirán remisiones y comunicados a precios convencionales, y anuncios a medio real la línea.

EL ECO DE ESPAÑA se publicará todos los días, a excepción de los lunes y las grandes festividades del año.

EL ECO DE ESPAÑA.

PERIÓDICO MODERADO.

En la Administración y Redacción de este periódico calle del Caballero de Gracia, número 40, principal.

El importe de la suscripción en Madrid se abonará en efectivo en la Administración. El de las provincias del propio modo, o por medio de libranza del giro múltiplo, o sellos de correos, y también por letras de esta redacción a favor de la Administración; de esta última manera o bien haciendo el abono en efectivo en la Administración, se servirán las suscripciones de Ultramar. El importe de las suscripciones que se envíen por cualquiera clase de giro, se hará por medio de carta certificada.

AÑO I.

MADRID.—JUEVES 17 DE MARZO DE 1870.

NÚM. 31.

PROYECTO DE LEY ELECTORAL.

DICTAMEN DE LA COMISION.
(Continuación.)

La alteración no se hará en ningún caso para las elecciones parciales ni extraordinarias.

Art. 50. El número de concejales que corresponda a cada ayuntamiento será proporcional al de habitantes del distrito municipal, y nunca bajará de la relación que se establece en la escala del art. 24 de la ley municipal.

Art. 51. Las elecciones ordinarias comenzarán en la época y en el día marcado en la ley municipal, y con arreglo a las bases fijadas para la renovación de los ayuntamientos.

Las que deban celebrarse en el concepto de parciales, o extraordinarias por disolución de los ayuntamientos o por muerte o incapacidad de sus individuos en los casos en que deban reemplazarse con arreglo a la ley municipal, se fijará la fecha de la elección por la comisión provincial.

Art. 52. Los colegios o secciones electorales se abrirán al público a las nueve de la mañana del día fijado para la elección.

Art. 53. A cada colegio o sección concurrirá a la ciudad hora el alcalde o regidor a quien corresponda por orden, y a falta de estos el alcalde de barrio que deba presidir la mesa interina.

El ayuntamiento hará la designación de los presidentes dos días antes del fijado para la elección, y la publicará en la parte exterior del local.

Art. 54. A cada colegio o sección se llevará por la autoridad que deba presidir y se colocará sobre la mesa el libro del censo electoral que le corresponda, y una lista por orden alfabético y numérico de los electores del mismo con dos casillas en blanco para estampar en ellas la palabra *efecto*.

La primera casilla servirá para anotar la votación de la mesa, y la segunda para la de los candidatos. Habrá también un ejemplar de esta ley y una urna para depositar las papeletas de la votación.

Art. 55. A la hora señalada para comenzar la elección, el presidente ocupará su puesto e invitará a los dos más ancianos y a los dos más jóvenes de los electores presentes, entre los que sepan leer y escribir, a tomar asiento en la mesa para ejercer las funciones de secretarios escrutadores interinos.

Si hubiere reclamaciones sobre la edad que declaren tener estos secretarios, se estará a lo que resulte del libro del censo electoral.

Art. 56. Después de haber tomado asiento los secretarios interinos, el presidente anunciará en alta voz: «Se procede a la votación de la mesa interina.» Esta se compondrá de un presidente y cuatro secretarios, elegidos por papeletas y por mayoría de votos.

Art. 57. No se admitirá a votar a persona alguna que no presente su cédula talonaria, o a quien se le dé por duplicado en aquel momento, en los casos de extraviado o denegación de entrega, según lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley.

Art. 58. La papeleta de votación contendrá el nombre del elector del mismo colegio o sección a quien se designe para presidente, y separadamente, bajo el epígrafe de *secretarios*, los nombres de otros dos electores, también del mismo colegio o sección, para secretarios escrutadores. No podrán ser elegidos para estos cargos los electores que no sepan leer y escribir.

Art. 59. Los electores se irán acercando uno a uno a la mesa y presentando sus respectivas cédulas talonarias al presidente, le entregarán la papeleta doblada, con su voto, la que aquel introducirá en la urna diciendo: «Voto del elector Fulano de Tal.»

La cédula talonaria será sellada en el anverso; y devuelta al elector, después de haber anotado un secretario en la lista numerada la palabra *voto*. Si hubiere votado con cédula duplicada, se anotará así en la lista para hacer imposible la votación del mismo elector con la primera, o la de otro a su nombre.

Si ocurriese alguna duda sobre la personalidad del elector, o sobre la legitimidad de su cédula, se identificará en el primer caso con el testimonio de los electores presentes, y en el segundo se cotejará la cédula con el talon. Cuando no se identificase la personalidad del elector, o resultase falsa la cédula, no se le permitirá votar, y la mesa lo hará constar así en el acta, tomando las disposiciones convenientes para que el pretendido elector sea remitido inmediatamente a los tribunales de justicia.

Art. 60. A las tres en punto de la tarde prohibirá el presidente, en nombre de la ley, la entrada en el local de la elección, cerrando las puertas del mismo, si lo considerase preciso.

Continuará después la votación para recibir los votos de los electores presentes, y luego que hubiese votado el último, un secretario escrutador preguntará tres veces en voz alta: «¿Hay algún elector presente que no haya votado?» No habiendo quien reclame o votando los que faltan, el presidente dirá: *Queda cerrada la votación*; no volviéndose después a admitir voto alguno y permitiendo de nuevo la entrada en el local.

Art. 61. Cerrada de esta manera la votación, un secretario escrutador leerá en alta voz los nombres de los electores que hayan tomado parte en la elección, y publicará su número: en seguida el presidente, abriendo la urna, dirá: *Se va a proceder al escrutinio*.

Art. 62. Este se verificará sacando el presidente las papeletas de la urna una a una, desdoblándolas y leyendo en voz baja, y entregándolas después a uno de los secretarios, para que a su vez las lea en alta voz y las deposite sobre la mesa por el orden que vayan sacando.

Los otros secretarios escrutadores llevarán simultáneamente nota de la votación para presidente y secretarios; cuyas tres notas se confrontarán, y en el caso que hubiera alguna duda, se cotejarán con las papeletas que se hayan ido colocando sobre la mesa.

Todo elector tiene derecho a leer por sí o a pedir que se vuelvan a leer, contar y confrontar las papeletas con las notas que hayan llevado los secretarios escrutadores.

Art. 63. Las papeletas cuya validez ofreciere duda, se dejarán aparte, continuando el escrutinio hasta terminarlo. La mesa examinará después las dudosas, y decidirá sobre ellas por mayoría con arreglo a lo que dispone el artículo siguiente.

Art. 64. En las papeletas en que se hubiese omitido la distinción de presidente y secretarios, se entenderá nombrado para el primer cargo el nombre del primero que se halle inserto, y para secretarios los dos siguientes. En las que contuvieran más nombres, se tendrán por valederos los tres primeros para los cargos indicados por su orden, y por nulos los demás. Los ilegibles se tendrán por nulos. Y sobre las faltas de ortografía, leves diferencias de nombres y apellidos, inversión de estos o supresión de alguno, la mesa decidirá en senti-

do favorable, cuando no haya elector alguno del colegio o sección con quien pueda equivocarse el nombre del contenido en la papeleta, consignando en el acta los hechos, sus resoluciones, y las protestas que se hicieron, uniéndolo en este caso al expediente las papeletas que hubiesen sido objeto de cuestión.

Art. 65. Cuando se encontraran dobladas juntamente dos o más papeletas, si contuviesen los mismos nombres y por el mismo orden, se contarán como una sola; pero si hubiese entre ellas alguna diferencia esencial que afectase a los cargos, se anularán todas, consignándose así en el acta. Las papeletas solo se apreciarán para confrontar el número de votantes.

Art. 66. No se admitirá ninguna reclamación ni protesta sobre la edad o la incapacidad del elector, ni en el acto de votar ni en el del escrutinio. Todos los electores que se hallen inscritos en el libro del censo electoral y cuya incapacidad no se haya declarado en los apéndices que se mencionan en el art. 22, pueden ejercer su derecho y computarse sus votos.

Art. 67. Terminada la lectura de las papeletas, dictadas las resoluciones sobre los casos dudosos y admitidas las protestas a que diere lugar, se procederá al recuento de los votos después de haber preguntado el presidente por tres veces consecutivas en alta voz: «¿Hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio?»

Art. 68. No habiéndose hecho ninguna protesta, o resueltas las que se hagan en la forma que determina el art. 65 de esta ley, cada secretario escrutador verificará el recuento de los votos obtenidos por los candidatos; y si resultase conformidad, se extenderá una lista de los que hubiesen obtenido votos por orden de mayor a menor, sin omitir ninguno. En el caso de que no haya conformidad entre los votos anotados se procederá a nueva revisión y recuento de las papeletas, atendiendo a lo que de estas resulte.

Art. 69. De esta lista se dará lectura en alta voz por uno de los secretarios escrutadores, y concluida, el que haya presidido la mesa proclamará presidente del colegio o sección electoral al elector que para este cargo hubiese obtenido mayor número de votos, y secretarios a los cuatro que para este cargo hubiesen también obtenido el mayor número de sufragios.

Art. 70. Después de proclamados los elegidos por el presidente de la mesa interina, se recontarán públicamente las papeletas y se quemarán acto continuo, excepto aquellas sobre que se hubiese hecho alguna reclamación, las cuales se unirán al expediente.

Art. 71. Si el presidente o alguno de los secretarios escrutadores elegidos no se hallasen presentes al concluir el escrutinio en el local de la elección, se les avisará a domicilio por el presidente de la mesa interina; y si no se presentasen en el término de una hora, se entenderá que renuncian, y se tendrán como elegidos los que para el cargo respectivo sigan en la votación inmediata en número, si se hallasen en el local.

Si ninguno de ellos se presentase media hora después, serán reemplazados los que faltasen por el presidente o secretarios de la mesa interina, cada uno en sus cargos respectivos, sorteados para cubrir el número de los que no se hayan presentado de la clase de secretarios, los que hubiesen desempeñado la interina.

Art. 72. El presidente de la mesa interina dará posesión de sus cargos al presidente y secretarios elegidos, declarando constituido el colegio o sección electoral.

En aquel mismo día los secretarios de la mesa interina redactarán y firmarán el acta de la elección de la definitiva, con arreglo al modelo núm. 2.º, que depositarán en la secretaría del ayuntamiento antes de las once de la mañana del día siguiente donde podrán examinarla los electores.

Art. 73. Constituidos al día siguiente, a las nueve de la mañana, en el colegio o sección electoral, el presidente y secretarios escrutadores elegidos, se declarará por el primero en alta voz *que se empieza la votación para concejales*.

Art. 74. El procedimiento de esta elección se arreglará a los mismos trámites establecidos para la elección de la mesa en los artículos 54 al 61 de esta ley.

Art. 75. Las papeletas contendrán tantos nombres como concejales corresponda elegir al colegio, y los que excediesen de este número serán nulos.

En las secciones se votará el mismo número que corresponda al colegio de que dependan.

Art. 76. A las cuatro en punto de la tarde se procederá al escrutinio en la misma forma prescrita en los artículos del 61 al 70.

Art. 77. Acto continuo el presidente y secretarios redactarán el acta parcial conforme al modelo núm. 3.º. Este acta se remitirá antes de las ocho de la mañana del día siguiente a la secretaría del distrito municipal, y de ella expedirá el secretario, con el V.º B.º del alcalde, la correspondiente certificación, que entregará al presidente de la mesa.

A cada acta se unirá una lista de los electores que hayan tomado parte en la elección, la cual se sacará de la numerada en que se hayan ido anotando los votos.

Art. 78. El presidente y secretarios cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que se fijen, en la parte exterior del colegio electoral o sección las listas con los nombres de los electores que hayan tomado parte en la votación, y la de los candidatos con los votos que hubiesen obtenido, por orden de mayor a menor.

Art. 79. A las nueve de la mañana del día siguiente se volverá a abrir el colegio electoral sin necesidad de anuncio, y ocupando la mesa el presidente y secretarios escrutadores, continuará la votación comenzada en el día anterior.

Si en el primer día de votación para concejales hubiesen emitido sus sufragios todos los electores, se dará por terminada la elección.

Art. 80. Concluida la votación el tercer día, y redactada su acta parcial en los términos referidos en el artículo 77, se publicarán las listas de los votantes y de los que hubiesen obtenido votos, y se extenderá el acta general del colegio o sección, uniéndolo a ella los resultados de los escrutinios anteriores con todos los incidentes de la elección. En este acta se observará todo lo prevenido para las parciales.

Art. 81. Al día siguiente de concluida la elección en los colegios que se hubiesen dividido en secciones, se reunirán las mesas de estas a la del colegio para practicar el escrutinio general del mismo. El presidente de la mesa del colegio presidirá esta junta. Del escrutinio que practique se levantará la correspondiente acta, que firmarán todos los concurrentes, y se observará en su redacción lo prevenido para las generales de los colegios.

Art. 82. En las poblaciones que no haya más de un colegio electoral, cada mesa elegirá a pluralidad de votos al terminar la votación del último día, un secretario escrutador que asista como comisionado al escrutinio general del distrito municipal.

En los colegios que se hubiesen dividido en secciones se nombrará este comisionado por las juntas de escrutinio del colegio y sección de que habla el artículo anterior y después de haber el escrutinio.

Art. 83. El escrutinio general se hará en todos los pueblos el segundo domingo del undécimo mes del año económico, a las diez en punto de la mañana, en las casas consistoriales, donde se reunirán todos los comisionados de los colegios con asistencia del ayuntamiento, presididos por el alcalde primero. Ni este ni el ayuntamiento tendrán voto en este acto.

Art. 84. Constituida de esta manera la junta general de escrutinio, bajo la presidencia del alcalde primero, se nombrarán, por mayoría de entre los comisionados, cuatro secretarios escrutadores que hagan la comprobación de las actas y recuento de los votos.

En los pueblos en que hubiese solo un colegio electoral se elegirán del mismo modo dos de los secretarios escrutadores y dos individuos del ayuntamiento, que en calidad de secretarios hagan la comprobación y recuento de los votos. Los dos secretarios procedentes del ayuntamiento tendrán en este caso voto con la junta.

Art. 85. La junta de escrutinio, después de haber hecho los secretarios la confrontación de las actas y el recuento de los votos, examinará todas las reclamaciones de los electores contra la legítima representación de los presidentes o secretarios de los colegios y secciones electorales, validez de la elección o autenticidad o exactitud de las actas.

De estas reclamaciones y de los motivos que para apreciarlas o desecharlas haya tenido la junta de escrutinio, se hará expresa mención en el acta, así como de las resoluciones que sobre ellas hubiese adoptado y de las protestas a que diesen lugar.

Art. 86. Serán proclamados concejales de cada colegio electoral los que resulten con mayoría relativa de votos hasta completar el número de los que corresponden elegir. En el caso de empate entre los electos, decidirá la suerte los que han de quedar de concejales. Hecha la proclamación de concejales electos por cada colegio, se hará la de los que componen el municipio o ayuntamiento del pueblo.

Art. 87. Se extenderá un acta del escrutinio con arreglo al modelo núm. 4.º, en la que se hará mención de las reclamaciones que se hubiesen hecho por los electores, resoluciones que se hubiesen adoptado, y de las protestas que hubiere habido, autorizándolas todos los presentes. Este acta se archivará en la secretaría del ayuntamiento.

Art. 88. Los nombres de los elegidos se exhibirán al público en los sitios de costumbre durante la segunda quincena del undécimo mes económico.

En este término los electores podrán hacer por escrito ante el ayuntamiento las reclamaciones que tengan por conveniente sobre la nulidad de la elección o incapacidad legal de los elegidos.

Art. 89. El primer día del duodécimo mes económico se reunirá el ayuntamiento en sesión pública extraordinaria con los comisionados de la junta general de escrutinio y con citación de los elegidos contra cuya capacidad se hubiese reclamado. Los comisionados resolverán definitivamente todas las protestas sobre nulidad de la elección, y en unión con el ayuntamiento las que se refirieran a la incapacidad o excusas legales de los elegidos, oyendo antes sus defensas.

De esta sesión se levantará acta, en la que se expresen los fundamentos de las resoluciones que adopten los comisionados de la junta de escrutinio sobre las protestas de nulidad de la elección y las que acuerden con el ayuntamiento, respecto a las de incapacidad o excusas de los elegidos, con lo que estos hayan expuesto en su defensa. A este acta se unirán las reclamaciones y se archivará con el acta de elección.

Art. 90. Las resoluciones que se mencionan en el artículo anterior serán ejecutorias si contra ellas no se hiciese nueva reclamación para ante la comisión provincial.

Art. 91. Si se hubiesen hecho, los ayuntamientos remitirán inmediatamente, bajo su responsabilidad, los correspondientes expedientes a la comisión provincial con el acta de la sesión extraordinaria, la que resolverá todas las reclamaciones de una manera definitiva, declarando la validez o nulidad de las elecciones o la incapacidad, incapacidad o excusas de los elegidos. Estas resoluciones deben dictarse por la comisión provincial antes del día 20 del duodécimo mes del año económico, en que quedarán terminados todos estos expedientes, para cuyo efecto tomarán los presidentes de la comisión provincial las disposiciones que crean más oportunas.

Art. 92. Pasado este día, devolverán todos los expedientes a los respectivos ayuntamientos, y sobre los que no hubiese resultado, se llevará a efecto lo acordado sobre las protestas de la elección, incapacidades o excusas de los elegidos, por los comisionados de la junta de escrutinio y ayuntamiento en la sesión extraordinaria que se refiere en el art. 89.

Art. 93. Cuando se anulase una elección por vicios cometidos en la elección de la mesa, la comisión provincial encargará la presidencia de la mesa interina al alcalde del pueblo de la cabeza del partido judicial; y si hubiese ocurrido en el distrito del pueblo cabeza de partido, se encargará la presidencia al alcalde del pueblo inmediato.

Las nuevas elecciones deberán estar celebradas para fines del duodécimo mes económico, para cuyo efecto la comisión provincial pondrá en conocimiento del ayuntamiento respectivo su acuerdo de nulidad, ordenándole que proceda a nueva elección.

Art. 94. Si por cualquier motivo no se hubiese nombrado el nuevo ayuntamiento para el primer día del primer mes del año económico, seguirá el del año anterior hasta que la elección se verifique y haya tomado posesión el nuevamente nombrado.

CAPÍTULO II.

De las elecciones para diputados provinciales.

Art. 95. Las elecciones de diputados provinciales serán unipersonales y por distritos. Estos distritos electorales estarán precisamente comprendidos dentro de los partidos judiciales existentes, o que en lo sucesivo se establezcan.

Art. 96. La división de la provincia en distritos para esta clase de elecciones la hará el gobierno, oyendo a las diputaciones provinciales, según dispone el art. 16 de la ley provincial: una vez hecha, no podrá alterarse sino por medio de una ley.

Art. 97. La división de la provincia en distritos electorales, el número de diputados que le corresponda elegir y el modo y forma de hacer su distribución, se

ajustarán a lo prescrito en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la ley provincial.

Art. 98. Además de las bases establecidas para la demarcación de los distritos electorales en los citados artículos de la ley provincial, se tendrá muy en cuenta la distancia respectiva de los pueblos que lo forman con el de la cabeza de distrito, procurando en lo posible, para los que constituyan su circunscripción, un radio próximamente igual, no pudiendo interponerse a menor distancia pueblos que pertenezcan a otros distritos.

Art. 99. Será cabeza de distrito electoral el de la cabeza de partido judicial en los que la tengan comprendida dentro de su demarcación. En los demás que se establezcan dentro del mismo partido, lo será el más céntrico de su demarcación.

Art. 100. Las elecciones ordinarias para diputados provinciales empezarán en la primera quincena del tercer mes del año económico, en el día que se fije por el gobernador de la provincia, que será el mismo para todas las provincias y distritos, y se harán en los mismos colegios y secciones establecidas para las elecciones municipales.

Art. 101. En los casos de renunciaciones o vacantes extraordinarias que por cualquier causa ocurran y deban reemplazarse según el art. 35 de la ley provincial, se procederá a hacer elecciones parciales, ingresando el elegido o elegidos en el lugar del que se reemplace o reemplacen.

Art. 102. La convocatoria para las elecciones ordinarias y extraordinarias que deban tener lugar con arreglo a las leyes, corresponde hacerla al gobernador de la provincia, quien la anunciará en los cinco días siguientes a la orden o el acuerdo en que se funden, debiéndose verificar en un plazo que no baje de diez días, ni exceda de veinte, con arreglo al citado art. 35 de la ley provincial.

Art. 103. Los ayuntamientos, con ocho días de anticipación al designado para la elección, acordarán y publicarán el local en que haya de verificarse en cada colegio o sección.

Art. 104. El nombramiento de mesa interina, el de la definitiva y todos los demás procedimientos hasta verificarse el escrutinio, se ajustarán a lo establecido para las elecciones de concejales en los artículos 54 al 61 de esta ley.

Art. 105. Los demás trámites hasta la proclamación del diputado en la junta de segundo escrutinio, serán iguales a los establecidos en los artículos 120 al 131 para la elección de diputados a Cortes.

Art. 106. En los distritos electorales en que no se halle comprendido el pueblo cabeza de partido judicial, presidirá, pero sin voto, la junta de segundo escrutinio el alcalde del pueblo cabeza de distrito.

Art. 107. Los diputados electos presentarán sus actas en la secretaría de la diputación provincial ocho días antes del designado para la apertura de sus sesiones, constituyéndose en este día del modo que prescribe el art. 26 de la referida ley provincial.

Art. 108. El resultado de las elecciones ordinarias y extraordinarias de diputados provinciales con los resultados de los votos que hayan obtenido todos los candidatos, se publicarán en el *Boletín oficial* de la provincia.

Art. 109. El gobernador, ocho días antes por lo menos, del señalado para la apertura de la diputación provincial, remitirá a la secretaría de esta las actas de las juntas de escrutinio de los distritos electorales y demás documentos que haya recibido referentes a las elecciones.

CAPÍTULO III.

De las elecciones generales para diputados a Cortes.

Art. 110. Las elecciones para diputados a Cortes serán unipersonales y por distritos. Cada provincia se dividirá en tantos distritos electorales como diputados deba elegir según su población.

Art. 111. La demarcación de los distritos se hará por el gobierno oyendo a las diputaciones provinciales.

Art. 112. Aprobada la demarcación por el gobierno, será permanente, y no podrá modificarse por otros medios que los marcados en el artículo anterior.

Tampoco podrá hacerse la citada modificación después de disuelto el Congreso de los diputados o el Senado y publicado el decreto de convocatoria para nuevas elecciones.

Art. 113. Los distritos electorales se arreglarán al número de 40,000 almas que corresponde al menos a cada diputado por el art. 65 de la Constitución.

Art. 114. Será cabeza de distrito electoral el pueblo que sea capital del partido judicial más céntrico de la demarcación.

Art. 115. Para fijar esta demarcación de los distritos electorales, se tendrá en cuenta la distancia de los pueblos que lo forman con el de la cabeza de distrito, procurando en lo posible, para todos los puntos de su circunscripción, un radio próximamente igual; no pudiéndose interponer a menor distancia de este radio pueblos que formen parte de otros distritos.

Art. 116. Si calculado el número de diputados que deba dar cada provincia por la base de 40,000 almas resultase una fracción que subiese a 20,000, la provincia en que esto suceda nombrará un diputado más, y se dividirá en tantos distritos electorales como diputados le correspondan, teniendo en cuenta la referida fracción.

Art. 117. Las elecciones para diputados a Cortes se harán en los mismos colegios electorales y sus secciones establecidas para las elecciones de los municipios. Empezarán en todos los colegios el día señalado por el gobierno en el decreto de convocatoria.

Art. 118. Los ayuntamientos fijarán y publicarán, con ocho días de anticipación al designado para hacer la elección, el local en que haya de tener lugar en cada colegio y sus secciones.

Art. 119. El nombramiento de la mesa interina, el de la definitiva y todos los demás procedimientos hasta la redacción del acta, se ajustarán a lo establecido para las elecciones de concejales en los artículos 54 al 73 de esta ley.

Art. 120. Del acta de elección de cada día se sacarán inmediatamente dos certificaciones literales, que autorizarán los secretarios de la mesa con el V.º B.º del presidente, y remitirán, la una al gobernador civil de la provincia por el correo más inmediato, y la otra al alcalde de la cabeza del distrito electoral, en pliegos cerrados y sellados con el sello del municipio, en cuya cubierta certificarán también su contenido dos de los secretarios con el V.º B.º del presidente de la mesa.

También comunicarán los presidentes de mesa al ministro de la Gobernación y al gobernador de la provincia por el medio más rápido, al terminar el escrutinio del día, un extracto de su resultado, expresando el número de votantes y de los votos obtenidos por cada candidato, por orden de mayor a menor.

Art. 121. Si alguno de los candidatos que hubiesen

obtenido votos en la elección del día, o cualquier elector en su nombre, requiriese certificación del número y lista de los electores votantes y resumen de votos, se le dará sin demora por la mesa.

Art. 122. A los tres días de concluida la elección en los colegios electorales, se instalará en el pueblo cabeza de distrito la junta de escrutinio del mismo, compuesta de un secretario comisionado por cada colegio electoral, el que será elegido por la mesa después de concluida la votación del último día. Las mesas de las secciones se reunirán con la del colegio de que dependen para hacer la elección de este comisionado.

Art. 123. Los secretarios comisionados llevarán a la junta de escrutinio del distrito copias literales certificadas de las actas de los tres días de elección de sus colegios y secciones y de los documentos que se hayan presentado.

Art. 124. El juez de primera instancia del pueblo cabeza del distrito presidirá, pero sin voto, la junta de escrutinio del mismo.

Art. 125. Constituida la mesa a las diez de la mañana en el local destinado al efecto, se empezará el escrutinio con la lectura de los artículos 121 y 122 referentes al acta. En seguida se hará presentación por el alcalde de la cabeza de distrito de las certificaciones de las actas de los colegios electorales que se le hubiesen remitido con arreglo al art. 119 y las que trajesen los comisionados, deducidas de las mismas actas.

Unos y otros documentos serán escrupulosamente confrontados por cuatro secretarios escrutadores elegidos en el acto por los comisionados de la junta de escrutinio.

El presidente, con los cuatro secretarios, hará el recuento y resumen de los votos obtenidos por cada candidato.

Art. 126. Si no se presentasen en la cabeza de distrito alguno o algunos de los comisionados de los colegios electorales a la hora de las diez de la mañana marcada en el artículo anterior para constituir la junta, se hará, no obstante, el recuento y resumen de los votos por las certificaciones que hubiesen remitido sus colegios al alcalde de la cabeza de distrito.

Art. 127. La junta de escrutinio no podrá anular ningún acta ni voto; sus atribuciones se limitan a efectuar, sin discusión, el recuento de los votos emitidos en los colegios y secciones electorales, ateniéndose estrictamente a los que resulten computados por sus respectivas mesas. Si sobre el recuento ocurriese alguna cuestión la decidirá la junta de escrutinio por mayoría de votos.

Art. 128. Si respecto al número de votos y de votantes no apareciese conformidad entre las certificaciones presentadas por el alcalde de la cabeza de distrito y las de los comisionados de los colegios, se estará al resultado de las que estos hubiesen presentado, y se pasará el tanto de culpa a los tribunales para que procedan en justicia a lo que hubiere lugar.

Art. 129. Concluido el escrutinio con el recuento y resumen de los votos, el presidente proclamará diputado por el distrito electoral al candidato que hubiese obtenido mayor número de votos.

Art. 130. Del acta del escrutinio del distrito se remitirá una copia literal, firmada por el presidente y los cuatro secretarios escrutadores, al gobernador civil de la provincia.

Art. 131. El acta de este escrutinio se archivará en la secretaría del ayuntamiento de la cabeza de distrito con las certificaciones de las actas de los colegios y secciones que se hubiesen remitido al alcalde del mismo y las que hubiesen presentado los comisionados de los colegios. De dicha acta se remitirá inmediatamente al diputado proclamado una certificación expedida por el secretario del ayuntamiento de la cabeza de distrito con el V.º B.º del alcalde. En ella se hará constar el número de votantes que han tomado parte en la elección del distrito; los votos obtenidos por los candidatos; las protestas y sus resoluciones que se hubiesen hecho en los colegios, y su proclamación. Esta certificación le servirá de credencial para presentarse en el Congreso de los diputados.

Art. 132. Terminadas todas las operaciones de esta junta de escrutinio, el presidente la declarará disuelta.

CRÓNICA PARLAMENTARIA.

Un discurso del distinguido *oculista* Sr. Cervera en contra del proyecto de ley de reemplazo del ejército, y otro del *grégrio* conde de Reus en defensa del mismo, constituyeron la parte principal de la sesión de ayer. El diputado republicano combatió la existencia de los ejércitos permanentes y con especialidad la organización actual del nuestro. No hay para qué decir que salieron a colación los consabidos argumentos de que los ejércitos formados por el sistema de quintas son la ruina de los jóvenes, de los pueblos y de la familia, con el obligado acompañamiento de frases sentimentales de que esos políticos filántropos tienen formado tan abundante repertorio. El señor Cervera trató la cuestión del ejército bajo los puntos de vista médico y militar. Bajo el primero, nos presentó un verdadero cuadro de horrores, que nos hizo partidarios del sistema que, según S. S., establecerían los republicanos, es decir, el eventual, por el que los soldados no saldrían del punto de su nacimiento durante los dos primeros años de su servicio.

Pero donde el Sr. Cervera demostró sus mayores conocimientos, fué al atacar la organización actual del ejército, dirigiendo sus tiros principalmente al arma de caballería que, según S. S., después de los modernos adelantos de las armas de fuego viene a ser un cuerpo inútil.

Entre otros de los argumentos que usó, pues no nos acordamos de todos en este momento, nos hicieron singular fuerza los siguientes: ¿Por qué han de emplear los soldados de caballería veinte minutos en cada uno de los tres piensos que diariamente han de dar a sus caballos, que en total suman una hora, hallándose expuestos, entre tanto, que es lo más lastimoso, a las coces que las bestias tengan a bien soltarles? Y luego, ¿por qué ha de existir la remonta y los potros han de estar meses y meses comiendo la cebada antes de que sean útiles para el servicio?

Estos argumentos no tienen vuelta de hoja, como suele decirse, y nos parece que, como oculista, el Sr. Cervera se expresó a las mil maravillas, elevando a grande altura el debate. Por nuestra parte, propendíamos, a fin de obviar tales dificultades, la supresión del pienso y la de la remonta, poniendo los caballos a pupilo para ahorrar a los soldados una hora de trabajo y el peligro a que durante ella se hallan expuestos, y comprando caballos hechos y derechos a seis o siete mil reales, ó para arreglarlo mejor, sujetar a todos los caballos a una quinta.

Pero después de todo, en medio de ataques como los que dejamos indicados, dirigió el señor Cervera otros más serios a la organización del ejército y al sistema de reemplazo establecido en el proyecto que se discute, y sobre todo combatió duramente la sustitución y redención, presentándolas como un privilegio odioso, por medio del cual las personas acomodadas se libraban de esa contribución, que no venía a pesar sino sobre los pobres. No podemos pasar por la afirmación del señor Cervera, que es uno de los argumentos con más insistencia empleados por los partidarios de la escuela a que S. S. pertenece. Ni es privilegio odioso, ni son lógicos los que, siendo partidarios del sistema del ejército formado de voluntarios, combaten la sustitución y la redención. ¿Pues qué sucede por estos medios, sino que en lugar de las personas a quienes ha designado la suerte entran a servir otras voluntariamente? Nos parece esto tan obvio, que no se necesitan más razones para confirmarlo. Establecer lo que indicaba el Sr. Cervera sería una verdadera tiranía, y privar de una lícita especulación a muchos para quienes esos medios ofrecen un modo decoroso de subsistencia y algunas veces de mejor fortuna.

El general Prim, que podía contestar victoriosamente a todos los ataques del diputado federalista, mantuvo el debate a la altura en que este le pusiera; y en un largo discurso, de esos sin formas, que suele producir S. S., y que hizo dormir profundamente al Sr. Topete en el banco azul, nos contó anécdotas de la guerra de África, con lo cual demostró que va envejeciendo; habló de las patatas, del pan, de los garbanos y del puchero que comen en Castilla, nos hizo saber que su señoría como rancho a menudo, que como asimismo en familia el pan que llevan de muestra para el ejército; y terminó, despertando involuntariamente con una alusión, acompañada de un ademán de compadre, esto es, poniéndole la mano sobre el hombro, al feliz ministro de Marina, que no se daría cuenta en aquel momento de qué mano era la que tenía encima, pero que al ver que era la de su compañero de gabinete, se rió, como se rió el general Prim, como se rió la Asamblea, y como nos reímos nosotros.

El Sr. Cervera estuvo, como todos los revolucionarios, en su lugar al combatir las quintas; quien no lo estuvo fué el general Prim, la comisión, ni nadie de los que las sostienen, después de las promesas que han hecho para lograr sus fines. A este ataque no podrán nunca responder, ni les releva del compromiso que adquirieron el refugio de que no fijaron la época en que debían cumplir sus ofrecimientos.

Los compromisos políticos ligam más de lo que los héroes de Setiembre se figuran: el país juzga y compara, y de este juicio y de esta comparación resulta que quedan completamente desautorizados, y todo el mundo sabe a qué atenerse respecto a la sinceridad de los hombres que hoy rigen los destinos de esta desgraciada nación.

El Sr. Serrano Bedoya defendió el proyecto al concluir el presidente del Consejo, manifestando que la comisión aceptaría el principio de la redención si las Cortes lo proponían. Si así se hace, el proyecto será ni más ni menos que la ley vigente, y no había para qué presentar proyecto alguno, viniendo a parar en último resultado a reconocer que no se podía mejorar lo que ya existía.

En la sesión de la noche continuó la discusión por artículos, habiendo quedado aprobado el 1.º, después de una discusión en que tomaron parte los Sres. Marquina, Eraso, y marqués de Sardoal en pró, y los Sres. Gil Berges y Abarzuza en contra.

EXIJO REVOLUCIONARIO.

Por más que se extienda la vista con avidez por todos los ámbitos de la nación, es lo cierto que no se alcanza a distinguir ni un re-

sultado útil, ni una medida ventajosa, ni un accidente, ni un síntoma siquiera que demuestre que los tristes sucesos por que ha pasado España de diez y ocho meses a esta parte, son la consecuencia lógica y precisa de una revolución necesaria. Se ve, sí, una insurrección triunfante; se contempla a los triunfadores en el poder, ufanos, mas acaso de una victoria inesperada, para la cual no estaban preparados, haciendo alardes de fuerza y buscando al mismo tiempo de reojo una salida que les permita libertarse del atolladero en que, contra su voluntad y sus previsiones, se hallan atascados.

No puede, en verdad, llamarse revolución allí donde, hasta ahora, no se ha efectuado más cambio radical, que el tan interesante para los vencedores del personal de empleados; allí donde se ha promulgado una Constitución con el único objeto, al parecer, de demostrar a los pueblos la facilidad con que se pueden, según las conveniencias, hacer y deshacer a capricho de unos cuantos interesados; allí donde nadie sabe aún en qué sentido se realizará esa revolución, y todos ignoran lo que será de nosotros el día de mañana; allí donde reina tal incertidumbre que todos los partidos pueden abrigar fundadas esperanzas de asistir, en un plazo más ó menos lejano, al entronizamiento de sus ideas y de sus aspiraciones.

Pero procedamos por órden; y para lograrlo, necesario se hace apelar a la narración de los hechos.

El grito de la insurrección se alzó en Cádiz. Todos conocemos los manifestos que se publicaron, y las halagüeñas promesas que se hicieron: anzuelo siempre el mismo, en todas las épocas y en todas las edades, y en el cual raras veces deja de morder la insensatez de los deseos ambiciosos y la siempre infantil in-experiencia de los pueblos.

Pero al dar este grito y al levantar su bandera, ¿estaba en la mente de los insurrectos cumplir con sus brillantes ofrecimientos? Hablen por nosotros los hechos que han ocurrido en estos diez y ocho meses, y que pesan sobre España con toda aquella gravedad que que pesaron un día los derechos individuales sobre la conciencia del Sr. Sagasta. Bien sabían los promovedores del movimiento que ninguna de aquellas promesas se podría realizar después de la mal llamada revolución de Setiembre, para cuyo sostenimiento se necesitarían, como nunca, las quintas, las contribuciones y toda especie de gravámenes. No; no era ni podía ser este su ánimo. El proyecto de la insurrección consistía, si salía triunfante, en derribar del trono a doña Isabel II, para colocar en él a otra rama de la misma familia; y si desde luego no se proclamó este intento, fué por no comprometer un nombre antes de tiempo, y por temor de exponer su bandera en una lucha cuyo éxito aparecía dudoso.

¿De dónde procedía tanta animosidad contra la augusta señora que ocupaba el solio? ¿Cómo pudieron contar los insurrectos con esos auxiliares reclutados en casi todos los partidos, y cómo se pusieron de acuerdo para tratar de arrancar la corona de las sienes de su legítima poseedora? Muy triste y sobradamente larga sería esta historia. Día llegará en que nuestros descendientes se preguntarán, a no dudarlo, con asombro, cómo pudo suceder que se atribuyeran de un modo tan injusto a todas luces, sobre una reina constitucional é irresponsable, todos los actos, todos los errores, todas las faltas, todas las responsabilidades, en fin, a que solo debían satisfacer los ministros; es decir, los que realmente habían gobernado. Pero si alcanzan a penetrar en el fondo de las cosas, aprenderán al mismo tiempo nuestros hijos, que las envidias, los odios, las enemistades personales, los celos y las rivalidades pueden a veces, en las resoluciones humanas, más que los principios políticos y más que las arraigadas creencias. El lazo que no alcanza a estrechar en un mismo partido la conformidad de ideas y de apreciaciones, logró formarlos entre fracciones opuestas y encontradas el rencor de imaginadas ó fingidas ofensas.

A pesar de esta unión, la empresa se presentaba árdua y arriesgada; tan temeraria, que difícilmente hubiera podido llevarse a cabo si no encontrara su principal ayuda en la medrosa nimiedad y en los inexplicables desaciertos del último gobierno, ó por mejor decir, de la última persona a quien la reina confiara la salvación del trono, y con ella la de la nación entera.

Mas si grandes fueron los errores del último gobierno constituido, no fueron menores los que cometió la insurrección. Hubo por una parte y otra más que acciones de armas, emulación de desvarios; y no serían mal llamados aquellos días si los calificase la historia con el nombre de «jornadas de los desaciertos».

La acción del puente de Alcolea no dió una victoria, ni mucho menos a la insurrección. Su anuncio llevó, sí, el desbarajuste más completo a la esfera del gobierno, y fué el mismo tiempo causa de desconcierto y de atollamiento para los insurrectos. Jamás se vieron vencedores más sorprendidos ni más embarazados de su victoria. En deliberaciones, en consultas, en dudas, en envío y recepción de telegramas, en sospechar y dudar unos de otros, que siempre hay lugar a recelos allí donde no existe adhesión íntima de ideas, perdieron un tiempo precioso; y cuando por fin se decidieron a marchar sobre Madrid, ya era tarde. Una revolución más exagerada había alzado la cabeza en la capital del reino, y había empezado por hacer pedazos las proclamas de Cádiz.

No era ya posible la ejecución de la idea acariciada por los incautos vencedores. En Madrid se habían abierto los clubs, se había perorado, se había enardecido los ánimos, se había pintado con los exagerados colores en que tanto se complacen las imaginaciones meridionales, la corrupción de pasadas administraciones, las miserias del pueblo, las esperanzas del porvenir; se había hablado de li-

bertades ilimitadas, de derechos ilegales, de igualdad, de soberanía popular; se habían exparado, por fin, todas esas ilusiones, tanto más halagüeñas, cuanto más imposibles y menos comprendidas. Al mismo tiempo, en las plazas, en los cafés, en las juntas ya formadas, se habían excitado y desahogado las pasiones contra los Borbones, a los cuales se achacaban todas las desgracias de la patria; se había señalado ese nombre como la única barrera que se oponía a la felicidad de la España, y como el solo borron que deslustraba su honra; se le había declarado ominoso y aborrecible, y cuando el general Serrano entró en la capital, pudo contemplar, tremolando al viento el pendón de «Abajo los Borbones», en manos de todo un pueblo armado para defenderlo, aunque no decidido conscientemente a hacerlo.

La insurrección se había ejecutado por españoles, más ó menos movidos por su ambición, por sus rencores y por sus rivalidades; pero de todos modos, y por desgracia para ellos, no tuvieron ni la presencia de espíritu de proclamar su idea en el momento mismo del triunfo, ni el arrojo bastante para venir sin dilación sobre Madrid, y realizar aquí sus proyectos, con la audacia que es menester para dominar los caprichos de la fortuna. La falta de esa decisión y de esa energía, que nunca llegaron a ser el privilegio de las mediantías, fué, pues, ocasión de que el vencedor se viese obligado a seguir el carro de un pueblo triunfante, al grito revolucionario de «Abajo los Borbones», grito nacido por inspiraciones, y tal vez a consecuencia de órdenes venidas del extranjero.

Los intereses extranjeros, que andan siempre algo mezclados en nuestras desavenencias, opusieron la fuerza del cálculo al imprudente engreimiento causado por una inesperada victoria, y supieron vencer sin lucha e imponer su voluntad a la insurrección. Los promovedores del movimiento de Cádiz se vieron, pues, burlados, y hubieron de doblar la cerviz ante la fuerza de las circunstancias, y ante la nueva faz que, contra sus provisiones, habían tomado los acontecimientos. En tal situación, no les quedaba más recurso que plegar su bandera, y así lo hicieron, con el fin de contener en lo posible la revolución, de ponerse a su cabeza y de traerla de nuevo paulatinamente, secretamente, hipócritamente, a la idea primera del titulado glorioso alzamiento.

Empezó desde entonces una lucha sorda entre los jefes de la insurrección y los partidarios de los clubs, lucha de diplomacia, de rodeos, de engaños, en que no se ha escaseado las declaraciones ni las protestas más contrarias a los propósitos, aunque ocultos, de los jefes de la revolución. Pero a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de los constantes trabajos, de las condescendencias y de las concesiones mutuas para mantenerse unidos y no perder su fuerza, nada se ha podido adelantar, y la lucha entre la insurrección de Cádiz y la revolución de Madrid, extendida al poco tiempo por toda España, sigue hoy día sin que se pueda prever su término, y tiene encerrado al país en un círculo de hierro que le sofoca y ahoga.

Entre tanto, cada partido combate por sus ideas, por sus deseos ó por sus ilusiones. El republicano, cuyos candillos reciben las órdenes de los centros directivos del extranjero, ha introducido en España las más estúpidas é irrealizables utopías, y entre otras, el absolutismo de los derechos individuales, ilimitados é ilegales, tan brillantes en la teoría como absurdos en la práctica, y en España mucho más que en nación alguna.

La fracción democrática ha puesto sus aspiraciones tan alto, que la vista de los simples mortales no alcanza a penetrarlas; pues difícil es comprender la monarquía en repugnante maridaje con la democracia, como ellos la entienden, en que el poder real es un inútil fantasma. El partido progresista, siempre con la piqueta de demolición en la mano, que ha sido en todas las épocas el distintivo de sus armas, amontona ruinas y nada crea, y no sabe dónde va ni lo que quiere. La unión liberal, fluctuando entre sus intereses de ayer y sus aspiraciones de hoy, está atada por sus compromisos ó por sus temores, y no sabe cómo deshacerse de sus lazos, ó le falta para ello el necesario arrojo: así sucede a quien en política pospone los principios a un momentáneo provecho.

Los carlistas defienden un ideal que se aviene mal con las corrientes prudentemente liberales que circulan por toda Europa, y que los gobiernos ilustrados son los primeros en sostener ó desarrollar; pero a pesar de esto, trabajan con afán los carlistas, se mueven, no han vacilado en empuñar las armas, saben aprovecharse de los errores de la situación, y no desesperan de llegar a sentar sobre el trono al duque de Madrid. Los disidentes de la unión liberal, fracción desgajada también del partido moderado, son pocos hasta el día, y están ocupados en formar una parcialidad distinta, cuando su fuerza solo la pueden hallar al girar la órbita a que pertenecían.

El partido moderado, desquiciado por los últimos sucesos, recobra aliento, apela a la unión y a la conciliación, gana el tiempo que graves é insuperables obstáculos le han hecho perder, y confía en que, desahogada por sí misma la revolución, sus principios serán proclamados y practicados por todos los hombres que, sin ambiciones personales ni miras bastardas, deseen sinceramente la recta administración de justicia, la buena gobernación del Estado y la práctica de una libertad bien entendida.

ORGANIZACIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

Vamos a ocuparnos de la organización y atribuciones de los ayuntamientos, según el proyecto de ley que estamos examinando, y ha sido objeto de los artículos anteriores.

Las mismas protestas que principiamos, repetimos hoy, y sin reparo las consignamos de

nuevo, para que no se nos tache de apasionados, atendida la significación política de nuestro periódico.

Hombres de partido, no nos ciega el amor a lo que nuestro partido ha hecho: queremos lo mejor; sosteniendo sin embargo lo inmejorable, y discutimos sobre lo que, atendidas las circunstancias, cabe hacer en un asunto de tanta importancia como es la organización municipal, que en la gran máquina administrativa constituye una de sus ruedas principales, no obstante parecer a algunos la de menor fuerza y poder.

Establece la ley que solo habrá ayuntamientos en los pueblos que cuenten 2,000 habitantes, respetando lo existente respecto los de menor vecindario, salvo empero las supresiones y agregaciones que puedan hacerse de los distritos actuales y con los distritos que hoy hay.

No nos parece aceptable este principio de la ley, como tampoco nos pareció acertado que, al modificarse la legislación de 1845 por el decreto de 21 de Octubre de 1866, que tomó el carácter de ley por resolución de las Cortes, se estableciese que solo hubiera ayuntamiento en los pueblos de 200 vecinos, ó sean 1,000 habitantes. Entonces se preceptuó que en el plazo de dos años desaparecieran las administraciones municipales de pueblos de menor vecindario, procediéndose a la incorporación de distritos, a fin de que, pasado aquel plazo, solo los hubiera en agrupaciones de 200 vecinos, mientras que ahora solo preceptúa la ley la época dada en que los debe haber en poblaciones de 400 vecinos. Debemos considerar que algo se establecerá en disposición posterior, porque sería una redundancia el señalamiento que hace la ley si perpetuamente los pueblos que hoy son distritos municipales han de conservarse, no solicitando su supresión el ayuntamiento y la mayoría de los vecinos ó no verificándose un ensanche y desarrollo tal, que las edificaciones de uno se confundiesen con las de otro.

Conocidas las condiciones de la mayoría de los pueblos de España, se puede sin temor asegurar que en bastantes siglos no llegarán los ensanches de la mayor parte de los rurales al límite de sus respectivas jurisdicciones.

Sabido, pues, que el principio capital de la nueva ley es que haya grandes distritos municipales, desapareciendo a este objeto los que hoy existen y no alcanzan a 400 vecinos, ó sean 2,000 habitantes, y sabida nuestra opinión contraria al tipo de 200 vecinos, ó sean 1,000 habitantes, que en 1866 se fijó como modificación de la ley de 1845, puede inferirse cuán desacertado nos parecerá lo que dispone la nueva ley sobre este punto.

En la estadística encontramos que de los diez mil ayuntamientos que próximamente existen en España, escasamente pueden formarse tres mil que lleguen a constar de doscientos ó más vecinos, y sin ningún temor podemos anunciar que no pasará de dos mil el número de los que resultarán por la nueva base indicada. Es menester que España tenga un desarrollo de población como no hemos visto en lo que va de siglo, ni es probable lo veamos en el transcurso de treinta años más; es menester, repetimos, un desarrollo de bastante consideración para que lo que dispone la nueva ley produzca buenos resultados. En la actualidad no cabe otra proporción racional que la reducción de los ayuntamientos en agrupaciones mínimas de 100 vecinos ó 500 habitantes.

Este número supone, por regla general, una extensión de territorio bastante para con su riqueza sufragar los gastos inherentes a su administración y una extensión de territorio de capacidad suficiente para que la acción administrativa pueda sentirse en ella benéficamente.

Conformes estamos en que las diputaciones intervengan muy directamente en los expedientes de creación, segregación y supresión de municipios y términos de los mismos, oyendo previamente a los ayuntamientos interesados y aun a los particulares que en ellos radiquen; también estamos conformes en que sean ejecutivos los acuerdos, si no hay disidencia ni reclamación alguna; pero creemos que debe intervenir la acción del poder ejecutivo, siempre que no exista conformidad completa, pues es indudable que ha de haber más independencia en resolver el desacuerdo en una autoridad, que no en una corporación compuesta de los mismos elementos que las localidades que motivan dicho desacuerdo.

Nuestro ilustrado corresponsal de París nos escribe con fecha 14 del corriente lo que sigue:

Sr. Director de El Eco de España.

Mi estimado amigo: Ya habrá V. visto por las noticias posteriores a mi última carta que, en efecto, el desasosiego ha cundido entre los amigos antiguos del imperio, al observar las consideraciones repetidas del actual gabinete a los partidarios de la dinastía de Orleans. En el Senado, con motivo del proyecto de abrogación del art. 57 de la ley fundamental, se han pedido explicaciones al gobierno, el cual parece que no las ha dado todavía por tener el pensamiento de revisar y variar muchos artículos de los consignados en la Constitución. Como esta revisión pudiera entrañar alteraciones de importancia en las atribuciones respectivas de los poderes públicos, y como se supone influencia a los orleanistas en tales modificaciones, los recelos no cesan. Añádese a los motivos de duda, la especie, ya bastante extendida en el público, de que la actitud en que el ministerio se ha colocado en la cuestión de infalibilidad del Papa, no es del agrado de altas influencias; de modo que no faltan sombras en cuanto a la solidez real del actual gabinete. Esto no obstante, es posible que desaparezcan las dificultades que hoy hay, y que, con un poco de flexibilidad recíproca, la situación se robustezca.

Continuo juzgando que la paz de Europa no se alterará, al menos inmediatamente. Hay, sin embargo, como decía V. en mi anterior, temores de lo contrario; tanto por las causas que ya le escribía, como porque, después, ha adelantado mucho la alianza franco-austriaca. Con esto, la creación de nuevos campamentos de instrucción que acaba de decretar el general ministro de la Guerra, y las cordiales relaciones del imperio con Rusia, hay muchos hombres políticos que creen en la constante prosecución de un sistema hábil para redondear una fuerte situación exterior, que permita en su día, cuando este día llegue, emprender ó resistir la guerra con Prusia.

La cuestión de infalibilidad del Papa no cabe

duda, al parecer, en que se resolverá en un sentido afirmativo. Sobre 700 miembros asistentes al Concilio, solo 150 serán hostiles a la declaración, y esto en opinión de los más ardientes opositores. Por más ruido que se pretenda hacer con las notas pasadas por Austria y con las cartas del conde Darú, ministro de Negocios extranjeros del gabinete francés, la cuestión se resolverá, y de cierto que no producirá ni puede producir las consecuencias exageradas que afectan temer los adversarios de la declaración. Como muy bien dice uno de los periódicos avanzados de esta capital la infalibilidad, una vez proclamada, no dará al Papa el poder de un gran Lama, imponiendo cada mañana al mundo los caprichos de su voluntad y de su ortodoxia. El Papa dará sus decisiones *ex cathedra*, es decir, después de haber consultado a los cardenales y a los presidentes de las congregaciones, apoyándose sobre los textos sagrados y sobre la tradición. Otras muchas juiciosas observaciones hace el periódico a que me refiero, y concluye aconsejando al gobierno que no ponga dificultades, y deje pasar sin ellas las resoluciones del Concilio. Es juicioso este consejo, porque habiendo en Francia treinta y siete millones de habitantes, y no llegando a dos millones los afiliados a todas las sectas no católicas, la inmensa mayoría de estos 35 millones de católicos, vé con sentimiento, cuando menos, la idea de crear un parlamentarismo religioso, pretendiendo hacer del Papa un soberano constitucional.

Excuso repetir a Vds. los pormenores que ya conocen, de la acogida cordialísima que en Roma ha tenido S. A. el príncipe de Asturias. Su Santidad le ha colmado de consideraciones, así como toda la corte pontificia y el episcopado español. El príncipe, cuya precoz inteligencia es muy notable, se ha hecho simpático a todo el mundo, y deja un grato recuerdo en la capital del Orbe católico. Entre los varios objetos que, como memoria del Pontífice para las personas de la real familia, ha traído S. A., hoy dos especialmente dignos de mención. Es el uno; una magnífica cuadro de mosaico, verdadera belleza de arte; y el otro un libro lujosamente encuadernado, en que está escrita la oración del «Padre nuestro» en más de doscientos idiomas. El príncipe salió de Roma, y hoy por la mañana estará en Marsella: pasará unos días en Hyeres, punto actual de residencia de la reina doña María Cristina de Borbon, y visitando tal vez a su regreso el arsenal de Tolon, volverá aquí a continuar sus estudios, en los que hace rápidos progresos.

Con sentimiento se supo ayer tarde por despacho telegráfico la muerte del infante D. Enrique, ocurrida por la mañana en duelo con el duque de Montpensier. ¡Qué desdicha la del duque! El carácter del ilustre difunto era no poco impresionable y apasionado; sus escritos se resentían frecuentemente de exageración; pero precisamente por estas circunstancias había necesidad siempre de disminuir el valor de sus afirmaciones. Era un príncipe español, joven, padre de familia; estaba en la desgracia, y aun en la carta que ha provocado el lance, manifestaba sentimientos de amor a su patria. ¡Qué desdicha, repito, la del duque! Después de todo lo que se ha escrito con motivo de la cuestión política de sus aspiraciones al trono de España, esta otra cuestión particular, seguida de la muerte de uno de sus parientes inmediatos, ha de suscitar recuerdos y dar origen a deplorables reflexiones.

S. M. la reina doña Isabel acostumbrada a perdonar siempre, y que en no pocas ocasiones ha tenido la pena de verse tratada con gran injusticia por el desgraciado D. Enrique, ha experimentado un vivísimo dolor con tan infausta nueva; y al escaparse de sus ojos lágrimas de sentimiento por este inesperado suceso, han expresado sus angustiosos labios esas ideas nobles que brotan siempre de su hidalgo corazón; esos pensamientos que revelan su generosidad, y que han reconocido cuantos han tenido la honra de estar cerca de S. M. por sus posiciones oficiales, ó han acudido a su bondad limitada; hasta los mismos autores de la rebelión de Setiembre de 1868, que en otros tiempos han hecho alarde de su respeto y adhesión a la reina, cuyas cualidades ensalzaban.

Respecto a las cosas de España, aquí no hay más que la opinión unánime de condenarlas. Una revolución hecha sin objeto, puesto que se ha dejado al acaso lo que después de ella había de establecerse; un aumento de gastos públicos; una notable disminución de respetabilidad nacional dentro y fuera; el aterrador incremento de la miseria; el prurito continuo de destruir; la intemperancia de aplicar eso que llaman libertad, hasta a las colonias, comprometiendo su suerte; las vacilaciones de un gobierno que ni sabe ni puede gobernar, y a quien odian todos sus adversarios por supuesto, y las tres cuartas partes de los que dicen que están a su lado; todo esto junto, es un espectáculo que ni siquiera se concibe en este país.

SOBRE EL NUEVO EMPRÉSTITO

DEL SEÑOR FIGUEROA.

Siempre que el Sr. Figuerola sube a la tribuna del Congreso a leer un proyecto de ley, se puede afirmar de antemano:

1.º Que va a pedir autorización a las Cortes para negociar un nuevo empréstito, porque la ciencia de S. S. está reducida a tomar dinero prestado; y

2.º Que va a proporcionar un buen negocio al Banco de París, sociedad flamante, recientemente creada para lucrarse con las operaciones que le proporciona, con una largueza inverosímil, el ministro de Hacienda español.

Y si alguna duda cupiera sobre esta afirmación después del fracasado empréstito de los 1,000 millones y de la llamada unificación de la Deuda, bastaría a disiparla el nuevo proyecto que vamos a examinar.

El señor ministro se propone vender los bonos existentes y las minas de Riotinto, verificar una operación de crédito sobre las minas de Almadén y Salinas de Torreveja, y realizar la garantía de la Caja de depósitos. El producto de estas operaciones se destina a pagar los descubiertos de los ciones se destina a pagar los descubiertos de los presupuestos municipales, a empezar a reembolsar los imponentes de la Caja, y a extinguir los saldos de los presupuestos de 1868-69 y 1869-70. Examinemos de qué medios se vale el ministro para realizar su empresa, lo que no es tan fácil como parece, atendiendo a la estudiada falta

de claridad con que el Sr. Figuerola se complace en escribir sus abigarrados planes.

Vamos, pues, a examinar, artículo por artículo, el nuevo proyecto.

«Art. 1.º Se autoriza al gobierno para negociar los bonos del Tesoro del empréstito de 25 de Octubre de 1868 que tiene actualmente en cartera, así como los existentes en la Caja de depósitos en garantía de imposiciones particulares, de ayuntamientos y diputaciones. Esta negociación se hará en firme y en una sola operación.»

Después de leído este artículo, y no teniendo a la vista el preámbulo, en el que quizá se hagan algunas aclaraciones, debemos consignar que ignoramos cuál es la entidad de la operación que se propone efectuar el ministro. ¿Por qué no expresa la cantidad de bonos que va a negociar? ¿Cuáles son los que tiene en cartera, y cuáles los existentes en la Caja de depósitos? No lo manifiesta.

Este silencio nos impone el trabajo de ir a buscar en declaraciones anteriores del Sr. Figuerola los datos que hoy falta.

Según el art. 3.º del proyecto de unificación, los bonos no emitidos todavía ascienden a 736 millones, y según el art. 6.º del decreto de 15 de Diciembre de 1868 sobre liquidación de la Caja, debían consignarse en la misma un número de bonos que represente al tipo de 80 por 100 el importe total de las imposiciones. Siendo el saldo de la Caja unos 1,400 millones debieron consignarse en ella como garantía 1,750 millones de bonos. Sin embargo, según nuestras noticias, el empréstito será de unos 1,300 millones.

Además de la enorme cantidad del empréstito, debe notarse que no se previene que se efectúe en pública subasta. Y esto realmente va picando en historia. Si el Banco de París es aficionado a los negocios de nuestra patria, debe sujetarse a la legislación de España que por motivos de moralidad previene que en remate público se verifiquen las contrataciones del Estado. No podemos creer que las Cortes, después del resultado desastroso del empréstito de los 1,000 millones, dejen al ministro con esa libertad omnimoda que pretende, y suponemos que decretarán que la negociación se verifique en subasta pública, admitiendo proposiciones de mayor ó menor cuantía, ó mejor en subasta nacional.

Sobre el tipo de la negociación ya haremos alguna indicación al final del presente escrito.

«Art. 2.º Se aplicará el producto de esta operación a cubrir las atenciones de los ayuntamientos en la cantidad estrictamente necesaria á enjugar el déficit que en cada presupuesto municipal haya dejado el ejercicio de 1869 por gastos ordinarios de los ayuntamientos, ó á cubrir las atenciones atrasadas correspondientes á dicho ejercicio, que por los mismos gastos tengan pendientes las municipalidades.»

Ya observamos ayer que se opone á los buenos principios de administración, y hoy añadimos que es el colmo de la ignorancia gubernamental y de la más inexplicable confusión el imponer al Erario la carga de satisfacer las atenciones de los ayuntamientos. Esta disposición es contraria abiertamente á la sabia ley de contabilidad, cuyo art. 1.º dice textualmente así: «Constituyen la Hacienda pública todas las contribuciones, rentas, fincas, valores y derechos que pertenecen al Estado. Sus rendimientos, que forman el haber del Tesoro, se aplican al pago de las obligaciones del Estado.»

La disposición no puede ser más terminante, el haber del Tesoro es para el pago de las obligaciones del Estado, y no para las obligaciones de la provincia ó del municipio, como pretende el señor Figuerola, y si el Erario es deudor á los ayuntamientos, y se quiere pagarles, dígame entonces que se aplicará el producto de la negociación á satisfacer los créditos ó parte de los créditos que las municipalidades tienen á cargo del Tesoro. No es esto una insignificante cuestión de palabras, es impedir que se ponga temeraria é incidentalmente la mano sobre la ley de contabilidad, y que se consigne un antecedente opuesto á la buena administración.

«Art. 3.º El gobierno pagará por todo su valor en cada semestre hasta haber completado la negociación, el importe de los resguardos de la Caja de depósitos, procediendo por el orden de menor á mayor valor de las cantidades depositadas, cuyos bonos en garantía son objetos de la negociación.»

No entendemos bien este artículo. Por lo visto, después de satisfechos los déficits municipales, queda un resto, que se va á destinar á pagar resguardos de la Caja de depósitos. Esto es bien claro, pero está muy lejos de ser la forma del pago. No se trata de una negociación en firme y en una sola operación, ¿pues qué significa el ir pagando cada semestre imposiciones hasta haber completado la negociación? ¿Cuántos semestres va á durar esa negociación en firme y en una sola operación? ¿Y por qué en acreedores de igual derecho se prefiere á los de menor cantidad? Lo que á nosotros se nos figura es que á los imponentes de la Caja no se les va á dar nada ó poco; menos, pero como se les vende la garantía de sus créditos, se pretende hacer creer que se intenta pagarles. Por lo demás, lo justo era pagarlos á todos, puesto que se dispone de una garantía que es su propiedad.

Y tan es así, que ayer se presentaron en la Caja varios imponentes que, convencidos que se les dejaba sin esperanza alguna, manifestaron que, haciendo uso de su derecho, estaban dispuestos á recibir sus depósitos en bonos al 80 por 100; que más querían perder hoy la cuarta parte de sus depósitos, á perderlo todo mañana. Y sin embargo, se nos asegura que se les negó su petición. Estando los bonos á 65 no ha querido el ministro darlos á 80 por 100, en contra de lo que tenía dispuesto anteriormente.

Esto nos parece muy grave.

«Art. 4.º Los bonos pertenecientes al Tesoro se aplicarán á la extinción del déficit de los ejercicios de 1868-69 y 1869-70.»

Satisfechos los ayuntamientos y la Caja de depósitos, queda aún algo? Según el artículo que precede algo debe quedar, por más que nosotros creamos que esta disposición es un puro adorno de la ley, que nada absolutamente significa, y para que variásemos de opinión, sería preciso que el señor Figuerola nos dijese el importe de la negociación de bonos, lo que piensa pagar á los ayuntamientos y á la Caja de depósitos, y entonces juzgaríamos si podía pensarse en extinguir los

déficits de dos ejercicios (que tampoco sabemos á punto fijo á los que ascienden) con el resto de la negociación. La verdad es que los diputados van á votar á ciegas.

«Art. 5.º Para apresurar la amortización de todos los bonos y cubrir el déficit, el gobierno queda facultado para vender las minas de Riotinto y verificar una operación de crédito sobre las minas de Almadén y salinas de Torrevieja.»

Ya pareció aquello; es decir, ya tenemos aquí el medio que se ha ideado á fin de hacer subir los bonos. El Sr. Figuerola apenas hace un mes destinaba estos recursos para asegurar el pago de cuatro semestres del 3 por 100, y hoy ya son para apresurar la amortización de todos los bonos. ¿Vaya si es voluble el Banco de París! Por no repetir argumentos, nos referimos á lo que decíamos en nuestros artículos sobre la unificación de la Deuda acerca de estos recursos del Sr. Figuerola, copiando hoy únicamente un ligero resumen del juicio que entonces emitimos.

«Aunque no se atendiera más que á las valiosas prendas de que el Sr. Figuerola quiere desprenderse y al infimo precio que va á recibir por ellas, deberían desaprobarse sus planes. Negociar bonos al tipo de 60 por 100, como máximo, no probable; vender anticipadamente cosechas, último recurso de los mayorazgos arruinados; desprenderse de la verdadera joya de la corona de España, las minas de Almadén, y en circunstancias tales, que es seguro que su precio distará mucho de su valor real, porque el que las compra tendrá que descontar lo que los franceses llaman prima de seguridad; y renunciar á las subastas públicas y á las ventas al detalle que tan ventajosos resultados daban para la enajenación de los bienes nacionales, es simplemente arrojar la casa por la ventana.

A esto, añadiremos que celebramos que el señor Figuerola renuncié á la venta de las minas de Almadén; pero que no comprendemos la conveniencia de apresurar la amortización de los bonos, si para esta amortización hay que crear otra nueva deuda, garantizada por las expresadas minas y las salinas de Torrevieja.

En cuanto á la venta de las minas de Riotinto, la creemos irrealizable, á no ser en términos desventajosísimos: 1.º, porque su tasación es poco menos que imposible; y 2.º, porque en el estado actual de penuria, de inseguridad y de desorden de España, aunque se pudieran tasar, solo siendo un negocio loco para el comprador, encontrarían licitadores.

«Quiere el Sr. Figuerola oír la opinión de un ministro de Hacienda progresista (que por cierto lo hizo mucho mejor que S. S.) sobre la venta de esas minas? Pues oiga las palabras que en 26 de Junio de 1867 pronunció en el Senado un amigo suyo, que hoy se sienta en la Asamblea Constituyente.

EL SR. SANTA CRUZ (D. FRANCISCO). «Cuando alcancé la honra de ser ministro de Hacienda (en el bienio progresista), tuve motivo para entender en un expediente de importancia sobre la enajenación de las minas de Riotinto. Entonces, dos ilustrados ingenieros recorrieron aquellas minas, levantaron planos y extendieron una minuciosa Memoria, que tengo aquí y dejo sobre la mesa del Senado. En ella se trata la cuestión de las minas de Riotinto con una latitud completa; se hace ver la inmensa riqueza de esas minas; se supone que se pueden sacar anualmente 10 millones de quintales de mineral, y que hay en lo reconocido, mineral bastante para once siglos. Esos ingenieros suponen que son de un valor incalculable, confesando ingenuamente que no alcanza su capacidad á calcularle. En su consecuencia, proponen que no se pongan en venta, á pesar de que entonces la ley lo dispina así. Yo, haciendo el aprecio que debía de esta opinión, propuse á las Cortes Constituyentes que á pesar de la ley de 1.º de Mayo, en que estaban comprendidas las minas de Riotinto, no se vendieran.»

Tanto por la solidez de sus argumentos como por la autoridad de la persona que los emite, sobre todo para su correligionario el Sr. Figuerola, nos parece demostrado que, ó no se venden las minas de Riotinto ó se venden ruinosamente.

Los artículos 6.º y 7.º, últimos del proyecto, se reducen á manifestar que el gobierno dará cuenta á las Cortes en el término de dos meses del uso de la autorización que pide, y á prometer un proyecto de ley, acompañado de una Memoria, sobre nuestro estado financiero, encaminado á arreglar definitivamente la cuestión de Hacienda. Lo que es por Memorias y promesas no nos podemos quejar; cada proyecto del Sr. Figuerola es un tratado completo de economía política, á juzgar por los encomios que su autor, á falta de amigos íntimos, hace de sus planes.

Considerando lo del arreglo de la Hacienda y la extinción del déficit como misión celestial, resumiremos nuestras observaciones sobre el presente engendro financiero, manifestando que está reducido:

1.º A pedir autorización para un nuevo empréstito sobre bonos, que no se indica ni la cantidad, ni el tipo de la negociación, ni se previene que se haga en pública subasta.

2.º A dejar sin garantía á la Caja de depósitos, prometiendo una devolución de capitales irrealizable.

3.º A echar sobre el Estado la carga de pagar los descubiertos municipales, en contra de la ley de contabilidad.

Y 4.º A hacer subir los bonos ficticiamente, asignando para apresurar su amortización recursos gravosos para el Tesoro si se realizan; pero como no se realizarán producirá este fracaso un terrible é inevitable descenso en estos valores.

«Cuál será el tipo de esta negociación? Los bonos estaban hace pocos días á 60 por 100, tipo verdaderamente depresivo, y con la nueva emisión es posible que bajen más. Sin embargo, ayer subieron, y corrió en la Bolsa la voz que el Banco de París (siempre el Banco) tomaba la nueva emisión á 70 por 100. Esto parece inverosímil; nadie pierda voluntariamente 130 millones de reales, y mucho menos el que no los tiene como le sucede al dichoso Banco; y si esta voz se confirmase, preciso sería creer que esta pérdida estaría más que compensada por medio de una de esas monstruosas comisiones que el Sr. Figuerola suele asignar á su querido Banco, ó por una venta convenida de antemano de las minas de Riotinto á un precio fabulosamente bajo, ó cosa por el estilo. Ya se sabrá.

En una palabra, el proyecto nuevo es, como todos los del sabio economista, empirio, inequitativo, injusto é irrealizable. La subida de la Bolsa de estos días costará muchas lágrimas en breve.

Para poder apreciar debidamente la diferencia de lenguaje usado por el señor marqués de Novaliches en sus alocuciones al pueblo y al ejército desde el cuartel general de Andújar el 24 de Setiembre de 1868, y el empleado por el señor marqués del Duero á los madrileños el 29 de Setiembre, vamos á reproducirlas á continuación para que pueda servir de paralelo. En la primera, resaltan los sentimientos de hidalgía y lealtad, que son el lema de aquel ilustre general, invocando el nombre de su reina y las leyes fundamentales del país, que todos habían jurado defender, mientras que en la segunda, se hace caso omiso de tan sagrados deberes, y hasta parece entregarse en brazos de la revolución.

Hé aquí los citados documentos, que insertamos íntegros:

Alocución del señor marqués de Novaliches á los andaluces.

«Andaluces: Vengo entre vosotros como general en jefe al frente de numerosas tropas disciplinadas, en cuyas filas figura S. A. R. el conde de Girgenti, para aseguraros el orden, interrumpido en algunos puntos por errores políticos y ambiciones personales. Levantando la cabeza la revolución, difícilmente hay poder en nadie para que se contenga en los límites á que sus jefes la quieren conducir. No os dejéis alucinar unos, ni otros por timidez permitáis que se os atropelle; mirad con tiempo por los fueros á que tenéis derecho ante la monarquía de una reina buena y generosa y ante la Constitución que hemos jurado, y estad seguros que hallareis la paz por que suspiran estos pueblos y la tranquilidad en vuestros hogares.—Cuartel general de Andújar 24 de Setiembre de 1868.—El marqués de Novaliches.»

Alocución del señor marqués de Novaliches al ejército.

«Soldados: Unos pocos de vuestros compañeros en Cádiz, Sevilla y Málaga han faltado á sus deberes, seducidos sin duda por el error político ó intenciones poco generosas, queriendo que aparezca otra vez el ejército como instrumento de pasiones y miras personales, sin tener en cuenta si quiera los males que puedan acarrear á nuestra desventurada patria. Ante vuestro deseo de formar parte del ejército de Andalucía, conociendo los nobles sentimientos que os animan, y la disciplina y entusiasmo que me habeis demostrado, solo tengo que encargar que al cumplir fiel y lealmente las obligaciones de buen soldado, seáis generosos, y mireis á estos habitantes como vuestros conciudadanos amantes de la reina, de la Constitución y del orden.—Cuartel general de Andújar 24 de Setiembre de 1868.—El marqués de Novaliches.»

Alocución del señor marqués del Duero á los madrileños el día 29 de Setiembre de 1868.

«Madrileños: La guarnición de esta capital, apoyada por los hombres honrados de todos los partidos, por todos los que quieren respeto á las personas y respeto á la propiedad, ha podido conservar el orden público hasta aquí sin molestar á nadie. Seguid todos prestando vuestro apoyo y manifestando vuestra aprobación incesante á la conducta noble y serena de las tropas que tengo la honra de mandar; esperad con calma los sucesos que se desenvuelven en la Península, y la causa de la civilización y de la libertad ni peligrará ni se manchará por exceso alguno en el pueblo de la metrópoli, que debe dar ejemplo á todos de cultura, y facilitar con su actitud firme y digna la solución que más convenga á la patria y á los intereses de todos.—Después de lo que acabo de manifestaros, os aseguro que se conservará la tranquilidad pública.—Manuel de la Concha.»

Parece positivo que el hijo del infante D. Enrique se muestra parte en la causa que se instruye con motivo de la muerte de su padre.

Ha llegado también á nuestra noticia que el juez de Getafe ha dirigido al del distrito en donde habita el señor duque de Montpensier un exhorto, para que éste comparezca á prestar declaración en la causa que se está instruyendo con motivo de la muerte del señor infante D. Enrique de Borbón.

Al terminar el mes de Febrero último, se debía á los contratistas de obras públicas nada menos que ochenta y seis millones de reales. ¿Nos quieren decir nuestros colegas ministeriales, de cuándo data esa enorme deuda? Es tanto más sensible, cuanto que esa deuda devenga el interés de 6 por 100 anual, y que por poco que se tarde en realizar el pago, llegará á 100 millones la deuda, sin que su existencia sea el medio mejor de fomentar las obras públicas.

Es fácil hablar de progreso y de fomento de tales obras; lo que no lo es tanto, es pagarlas; mucho han dicho los progresistas á cerca de las administraciones anteriores, pero de seguro se dirá más y con mayor fundamento de la actual.

Parece que se ha mandado aplicar al personal de marina los residuos ó extencías de loterías. Hasta ahora se negociaban en subasta pública por la dirección general del Tesoro é ingresaban en su caja; proceder de otra manera, es faltar á la ley de contabilidad que todos los partidos han reconocido hallarse fundada en los buenos principios de una ordenada gestión rentística.

Por otra parte, el personal de marina está al corriente en el percibo de sus haberes, mientras que se halla desatendido el pago del material y jornales de los operarios en los arsenales. Nos parece que es un verdadero desbarajuste, que demuestra bien á las claras cuál es la situación y el desconcierto de la Hacienda.

Es muy singular lo que se está observando de algún tiempo acá en España. La revolución gritó: ¡Adios los Borbones! y se dijo que toda la nación deseaba que desapareciese de su suelo aquella raza.

Pues bien; los buenos españoles, los que no han faltado á sus deberes y permanecen fieles á sus juramentos, quieren la vuelta de la familia

real que actualmente se halla en Francia; los carlistas quieren otro Borbon; los montpensieristas y algunos progresistas quieren otro Borbon; y hasta los republicanos se ha dicho que también querían otro Borbon.

Como se vé, diferimos en individuos, mas en cuanto al apellido todos estamos conformes; de una ó otra manera, todos decimos: ¡vuelvan los Borbones!

Confirmando lo que ya hemos dicho en números anteriores, tomamos de *Le Gaulois* del martes los siguientes despachos telegráficos que se han cruzado entre S. M. el rey y su sobrino el hijo mayor del desgraciado infante D. Enrique:

«PARIS á las cinco de la tarde.

Mi querido sobrino: Ya comprenderás la parte que tomo en la desgracia que acabamos de experimentar.

Si algún consuelo puedes encontrar es al saber que desde hoy hallaras en mí el cariño del padre que has perdido y á quien quiero reemplazar.—FRANCISCO DE ASIS.

«MADRID.

Mi querido tío: Estoy en el mayor desconsuelo y no sé qué hacer; aconsejádme.—ENRIQUE DE BORBON.

«PARIS.

Cumple con tu deber, recibe el duelo, y vente á París en seguida; mis brazos te esperan.»

El mismo colega francés añade que S. M. el rey envió por las hijas del desgraciado D. Enrique al colegio en que se están educando.

Aquella misma noche se les indicó por su augusto tío, que su padre había sido acometido de una apoplejía que hacia temer por su vida, y hoy se fingirá la llegada de un despacho anunciando su muerte á consecuencia del ataque de apoplejía supuesto. De este modo se evitará á las huérfanas, durante el mayor espacio de tiempo posible, el conocimiento del drama que ha costado la vida á su padre.

Según *La Correspondencia*, el ministro de la Gobernación ha telegrafado á los gobernadores civiles participándoles que en un término breve se facilitarán á las provincias los recursos necesarios para sus perentorias atenciones.

Nos parece mucha oficialidad la de avisar por telegramo lo que no se ha de poder realizar en toda la primavera. ¿De dónde ni cómo se ha de enviar á las provincias lo que necesitan para sus atenciones, si no hay un céntimo en el Tesoro, y cuando se buscan los fondos de otras provincias para hacer los pagos en la tesorería central?

Signen arrojando los rumores de modificación ministerial; á la noticia que ya dimos en un número anterior sobre la salida probable del Sr. Figuerola, hay que añadir la del Sr. Becerra; llegándose hasta el punto de darle por sucesor al señor Ruiz Gomez.

Mucho nos equivocamos si esta última noticia no se relaciona con el proyecto de supresión de la sala de Indias, que se atribuye al actual ministro de Ultramar.

La separación del Sr. Hoppe ha traído más cola de la que esperaba el Sr. Becerra.

Se ha dado cuenta á las Cortes de un suplicatorio y tanto de culpa del juez de primera instancia de Estepona, para procesar al diputado señor Paul y Angulo por el delito de rebelión.

Reunida á las dos de la tarde de ayer en la presidencia de las Cortes la comisión sobre venta de los bonos del Tesoro, se suscitó de nuevo la cuestión propuesta por el Sr. García Briz sobre los derechos de los ayuntamientos; después de una detenida discusión, en que tomó parte el señor ministro de la Gobernación, se resolvió equiparar á los imponentes particulares de la caja de depósitos con aquellas corporaciones que no necesitan ni quieren vender sus bonos. Habiendo llegado con esto al mejor acuerdo los individuos de la comisión con los dos señores ministros de Hacienda y Gobernación, se procedió á redactar el dictamen, modificando ligeramente en aquella parte el proyecto del Sr. Figuerola.

La proposición de ley de los republicanos para igualar en el pago á todas las clases y todas las provincias, cuya lectura fué autorizada, anteayer por las secciones, dice así:

«Artículo 1.º Todos los acreedores del Estado, bien por títulos de la Deuda pública, bien por sueldos y pensiones, bien por cualquier otro concepto, serán pagados por igual en la proporción que permita el estado del Tesoro sin distinción de clase, categoría ni domicilio.

Art. 2.º No podrá abrirse nunca el pago de una mensualidad ni el de uno de los semestres de la Deuda, que no estén satisfechas las obligaciones todas de la mensualidad ó de semestres anteriores, ó consignadas por lo menos en las respectivas tesorerías las cantidades necesarias para acabar de satisfacerlas.

Art. 3.º Toda trasgresión de lo consignado en los anteriores artículos, será castigada con arreglo al artículo 320 del Código penal.—Palacio de las Cortes 3 de Marzo de 1870.—Juan Tutau.—Pedro J. Moreno Rodríguez.—Francisco Pi y Margall.—José Tomás y Salvany.—Emilio Castelar.—Buenaventura Abarzuza y Ferrer.—Pablo Alsina.»

Dícese que en virtud de la autorización otorgada por las Cortes para procesar al Emmo. señor cardenal arzobispo de Santiago, ha dispuesto el supremo Tribunal de Justicia que reconozca la carta que dirigió al señor ministro de Gracia y Justicia, y que ha sido la causa del procedimiento.

Al efecto, se ha librado la orden oportuna al regente de la audiencia de la Coruña, para que personalmente evacue la diligencia, ó para que comisione con tal objeto al juez de Santiago, si le es imposible al regente trasladarse á esta ciudad.

Al señor obispo de Osmá se le trajo á Madrid entre guardias civiles solo para oír una notificación; y con este motivo dijo el Sr. Martos que la ley debía ser igual para todos. Por su parte el señor Montero Ríos, ministro de Gracia y Justicia, dijo que estaba conforme con que así fuese, y con que se tratara á los arzobispos y obispos lo mismo que á cualquier ciudadano.

Pues bien, hasta ahora, el duque de Montpensier no ha ido al juzgado de Getafe á prestar declaración en la causa que en el mismo se instruye; ni el señor ministro de Gracia y Justicia ha tomado el asunto con el calor con que tomó el de los obispos; ni el Sr. Martos ha pedido que la ley fuese igual para todos.

Ayer, precisamente, se le presentó ocasión muy oportuna para haber insistido en su pretensión de que la ley fuese igual para todos; pues daba la casualidad de que al principio de la sesión se dió cuenta del suplicatorio de un juez de esta capital para procesar á un diputado que intervino en un lance, cuyo resultado fué idéntico al del sábado último en la dehesa de los Carabanchales.

Es de suponer que si no se ha hecho, se hará, y que no se dará el ejemplo de dos procesos contra altas dignidades de la Iglesia y de otro contra no sabemos quiénes y contra un diputado, y que se trate de echar tierra sobre otro, cuyo motivo ha sido y es el objeto de todas las conversaciones de Madrid.

La Política, desesperado de poder sacar á la orilla la candidatura de Montpensier, ahogada desde el sábado en sangre española, dice muy formalmente que antes que aceptar por monarca un simple caballero español, prefiere sin vacilar la república.

No dudamos que los unionistas sean capaces de llegar hasta ese extremo si á ello les llama su conveniencia, único Dios á quien siempre rindieron culto.

Ayer tarde se leyó en el Congreso un suplicatorio del juez del distrito de Palacio, pidiendo autorización para procesar al diputado Sr. Anglada, á quien se supone testigo en el duelo que tuvo por resultado la muerte de D. Celestino de Olózaga, mañana hace un año.

No deja de ser notable la circunstancia de no haberse leído hasta ayer en el Congreso este suplicatorio, que debía estar presentado hace mucho tiempo, según dijo la prensa poco después de la desgraciada ocurrencia lo que motivó.

Las Novedades, á propósito de la manifestación contra las quintas, en que el general Prim fué obsequiado con naranjas, piedras y otros mimos liberales, dice que las manifestaciones, como todas las cosas, tienen su límite.

Vamos viendo que los periódicos que tanto ponderaban los preciosos derechos individuales, van creyendo ya que todos los pomposos calificativos con que les encomiaban, deben ser sustituidos con uno solo: el de derechos inagotables.

La verdad es que ni ellos mismos pueden ya sufrir su propia obra.

¡Pobres revolucionarios! ¡No necesitan más castigo!

Los periódicos montpensieristas, ó callan como *La Correspondencia*, ó siguen negando el desafío entre el duque de Montpensier y el infante D. Enrique de Borbón.

El resto de la prensa sigue dando pormenores de esta sangrienta catástrofe y de sus antecedentes.

El juzgado de Getafe continúa averiguando, al decir de algún periódico, si es ó no cierto que la muerte de D. Enrique fué una desgracia casual.

El duque de Montpensier, restablecido completamente en su salud, continúa en su palacio de la calle de Fuencarral.

«Leemos en *El Pueblo*: «Periódicos hay para quienes el duelo entre Montpensier y D. Enrique es un cuento; y sin embargo, censuran con acritud á aquellos de sus colegas que se han ocupado del asunto. Pues si es un cuento, ¿qué mal hace la inventiva de estos diarios?

Ninguno, como no sea hacer pasar á Jovellanos por las horas caudinas del unionismo. Todo el mundo sabe que su *Delincuente honrado* tendía precisamente á un fin moral muy distinto del que suponen sus actuales comentaristas, y que no era otro sino el de atacar en su raíz la fantasma de un honor convencional.

Por lo demás, ni esos, ni ningún otro periódico tuvieron palabras desahridas para muchos que contaron en su día la tragedia de que fué víctima un secretario de las Cortes.

Conste por lo que valga.»

PARTE OFICIAL.

La Gaceta de ayer no publica disposición alguna de interés general.

REVISTA DE LA PRENSA.

La mayor parte de la prensa sigue ocupándose con preferencia de la catástrofe que ha producido la muerte del infante D. Enrique de Borbón.

La Época, evocando recuerdos anteriores á la desgraciada ocurrencia, y juzgando de la situación del duque de Montpensier después de aquella, se expresa en estos términos:

«Es imposible separar, al decir de los periódicos, la atención ni los ojos del drama terrible que ha tenido por teatro la dehesa de los Carabanchales, y por actores dos príncipes pertenecientes á ilustres familias de Europa.

Sangre real corría por sus venas; eran parientes muy próximos de los que han ocupado los tronos de España y Francia, y hallábanse unidos por vínculos análogos á muchos de los soberanos reinantes.

D. Enrique de Borbón había nacido el 17 de Abril de 1823, é iba á cumplir por lo tanto cuarenta y siete años.

Estuvo casado con la señora doña Elena Castellví, hermana del último conde de Castellá, y de ella dejó tres hijos: dos varones y una hembra.

El mayor de ellos, á quien su padre cedió poco há el título de duque de Sevilla, era en el momento de la catástrofe alférez del regimiento de caballería de Pavía, de guarnición en Madrid.

El duque de Montpensier nació el 31 de Julio de 1824, y es por lo tanto algo más joven que su infeliz adversario.

Tiene siete hijos, de los cuales el último apenas cuenta tres años.

Entre antepasados entre los dos primos las desavenencias que han tenido tan funesto desenlace.

Antipatías personales, choques pequeños, pero que, como la gota de agua sobre la piedra, acaban por producir grandes resultados, habían envenenado de tiempo atrás sus relaciones.

No era la primera vez que el infante D. Enrique atacaba por medio de la prensa violenta y duramente al hijo menor de Luis Felipe.

Parecía como que entrambos tenían el presentimiento de la tragedia del sábado.

Cierta noche que el duque de Montpensier leía en su tertulia de Sevilla una de las furiosas diatribas que el difunto no le escusaba, volviéndose hacía las personas que se hallaban presentes, y les dijo, pálido, descompuesto, convulso:

«Este hombre ha de ser mi perdición!

Por parte de D. Enrique no eran tampoco menos fatídicas sus ideas acerca del término de las cuestiones que les dividían:

—El olí— solía exclamar cuando se trataba del asunto.

La víspera del duelo, en los momentos mismos en que este se realizaba, no ocultó a nadie los temores de que la suerte le fuese fatal.

Pero su carácter indomable, enérgico e inaccesible al temor, resistió a cuantas indicaciones se le dirigieron para venir a un arreglo amistoso.

—No, no,—decía,—me matará, si la Providencia lo determina así; pero no cederé jamás.

¡Deplorable firmeza, que tan dolorosas consecuencias ha producido!

¡Triste valor, digno de mejor causa y de más noble fin!

Nada igual a la desesperación de Montpensier cuando se hubo convencido de la muerte de su contrario.

¡Era que su corazón se estremecía al ver que había derramado la sangre de una persona de su familia!

¡Era que adivinaba las consecuencias que la catástrofe podía originar a sus intereses particulares!

Sin duda las cosas, y el efecto físico que ha determinado la afección moral es elocuentísimo y hace inútil todo comentario.

La Esperanza formula, entre otras, las siguientes preguntas, que parece revelar algo gravísimo aunque no enteramente desconocido, así en el fondo como en los detalles, del terrible lance ocurrido el sábado último en la dehesa de los Carabanchales:

«¿Es cierto, como ha dicho *El Imparcial*, que el comisario de policía que recogió el primer cuerpo de D. Enrique, media hora o una después de haber sido abandonado por sus testigos, por el duque de Montpensier y por éste, que se llevó al médico consigo, le halló aún con vida?»

Otra: «¿Es cierto, como lo ha dicho *La Epoca*, que el duque de Montpensier, después de atravesar la sien de su primo hermano y sobrino, y del abandono de su cuerpo, tuvo la sublime inspiración de querer adoptar a los hijos del difunto, y la sublime osadía de dirigirles esa proposición?»

Última pregunta: La declaración que se dice se ha tomado a los testigos del lance, y en la que, según se dice también, estos han dicho que a D. Enrique se le disparó una pistola que estaba probando, atravesándole el tiro la sien, ¿se ha hecho extensiva al duque de Montpensier, y ha dicho el duque de Montpensier ante la justicia lo que se cuenta que han dicho los testigos?

Esperamos que algún diario montpensierista responderá a estas preguntas, y esperamos que las contestará satisfactoriamente, porque el duque de Montpensier nos inspira ya bastante lástima para que deseemos ver más rebajado su carácter, y más agravada su posición.

El triste lance de la dehesa de los Carabanchales trae, con razón, preocupados a todos.

La prensa amiga del duque, rompió al fin el silencio para publicar, más o menos encubiertamente, el contenido del sumario y la historia de la pistola que rebentó y que estará, lo suponemos, unida a la causa, y se habrá comparado su calibre con el trayecto de la bala y la dirección del proyectil, y su triste camino a través del cráneo del infortunado príncipe español.

Se debe suponer así, bien que los testigos todos están conformes, y serán, como de público se dijo, y en los periódicos, sin que nadie los desmintiese, los generales Córdova y Alaminos y el ayudante Solís, y los diputados republicanos.

Habrán sido investigados los oficiales de artillería que estaban cerca y los soldados que debieron verlo, y los dos médicos que estaban allí, por casualidad, y los cocheros, y los vecinos o trabajadores que estuviesen cerca, y los agentes de policía que acudieron, y el mismo duque de Montpensier.

Suponemos que todo esto se habrá hecho y acreditado en regla, y que se publicará en su día para la completa satisfacción de Madrid y de España.

No decimos más hoy.

De una hoja suelta, firmada por D. Antonio Muñoz de Marco y titulada el *Testamento de D. Enrique de Borbón*, cuyo documento circulaba estos días con gran profusión, y sentimos no poder reproducir íntegro por su mucha extensión, tomamos los siguientes párrafos:

«No pretendemos perseguir a los perseguidos, ni aumentar la desgracia de los desgraciados; pero somos amantes de la verdad, y por el decoro de España, por el decoro del gobierno, por el decoro del mismo malhadado duque de Montpensier, debemos contestar a ciertas especies que circulan, con motivo del lance que ha conternado al pueblo de Madrid.

También se ha dicho que el duque quiere proibir a los cuatro huérfanos de D. Enrique. No creemos que el duque de Montpensier esté tan falto de sentido moral, que hubiera podido concebir que los cuatro huérfanos de su víctima cometieran la execración de consentir ser prohibidos por el matador de su padre. El señor duque es más moral que todo eso.

También se ha dicho que pretendía costear el entierro y los funerales del difunto. Este rumor es otra falsedad que ultraja al duque de Montpensier. El señor duque de Montpensier respeta más a nuestro país. El señor duque de Montpensier sabe muy bien que España es un pueblo altivo y glorioso. El señor duque de Montpensier sabe muy bien que los españoles tienen siempre dinero para enterrar a un español.

¡Si, señor duque de Montpensier! El primer insultado fué D. Enrique de Borbón. ¡Si, señor duque! ¿Ha olvidado V. ya su historia?

Usted era individuo de una familia desechada en el vasto imperio; V. vino a España como emigrado, y en esta tierra generosa encontró ese emigrado todo lo que podía apeteer: infantazgo, capitania general, mujer, hijos, riqueza, delicias, áura, cariño público. ¿Qué más quería V., señor duque? ¿Qué más quería el naufrago de la familia de los Orleans?

Pero el naufrago quería más, señor duque de Montpensier: aquel naufrago hizo traición a su propia hermana.

Pero quería más. Aquel naufrago viene, vé, entra, sale, se muestra, se esconde, buscando siempre una altísima honra contra la voluntad de los gobernantes, contra la voluntad de la Asamblea, contra la voluntad del pueblo español.

Pero quería más. El naufrago busca un pretexto (los baños de Alhama) para conferenciar entre tinieblas, para exhibirse en el teatro de la Opera, como el mercader nuestra en su escaparate los géneros de novedad. El naufrago viene a Madrid, soñando tal vez que lo recibirán bajo pablos, el pueblo, el clero y la nobleza.

Vé que no: vé que se ha engañado, y ¿quién sabe si quería más el señor duque de Montpensier? ¿Quién sabe si esperaba recibir la corona de España de manos de un golpe de Estado, de manos del ministerio, de manos de la ceguera de un partido? ¿Qué responsable es la unión liberal! ¿Qué bien merecido lo tiene la debilidad de los gobernantes, la ambición de un bando, la locura de un duque, la hidalguía de un pueblo!

El muerto no hizo sino pagar escasamente, volviendo un insulto por tantos insultos recibidos. El muerto no hizo otra cosa que arrojar sobre el duque, sobre el emigrado extranjero, sobre el traidor de su familia, el esqueleto casi deshecho de los Borbones.

Pero el naufrago, el emigrado antiguo, quería más, señor duque de Montpensier.

Reta a un padre desesperado; reta a un padre que no tiene en su casa a todos sus hijos, porque no los podía mantener; reta a un padre que se ve en la agonía; lo reta a muerte, le tiene delante, coge el arma, hace fuego, le rompe la culata de la pistola, y siendo el duque el agraviado, siendo el duque el que debía perdonar, el duelo continúa, el duque extranjero, el antiguo emigrado, no arroja el arma fratricida.

El padre desgraciado conoce al fin lo que la suerte le reservaba, y dice a su médico, el digno, el humano doctor Leira: «Tóme V. el reloj y entréguelo V. a mi hijo. Yo tiro al azar, el duque afina la puntería, y me mata.»

¡Ah, señor duque de Montpensier! ¿No veía V. detrás de aquel hombre las lágrimas de cuatro huérfanos? ¿No tiene V. hijas? ¿No temió V. algún castigo de la Providencia? ¿No temió su mano, y más que su mano su corazón? ¿Cómo pudo AFINAR LA PUNTERÍA?

Suena otro disparo; un disparo del extranjero que halló en esta tierra tan generosa hospitalidad: suena aquel disparo... era el tercero... El señor duque de Montpensier sabe lo demás.

¡Sombra de D. Enrique de Borbón, duerme tranquilo; tu testamento se cumplirá al pie de la letra! Tú dijiste a varios amigos la noche antes de morir.—«Si yo le mato, no es rey de España. Si él me mata a mí, no es rey tampoco. Muero contento: mi vida vale poca cosa.»

¡Sombra de D. Enrique, duerme en paz! Un pueblo valiente; la noble nación española queda encargada de que se cumpla tu codicilo. ¡No seas rey de España! ¡No será rey de España el extranjero que da muerte a los españoles! ¡No será rey de España un delincuente que puede sufrir de siete a doce años de presidio! ¡No será rey de España, por tanto, por matar a un hombre en una aventura juvenil, casi en una calaverada, está hoy pendiente del fallo de un juez.

¡Duerme, sombra de D. Enrique! El antiguo emigrado que ahora se encuentra bajo el imperio de la ley, ¿cómo puede ser jamás en España el supremo regulador de las leyes?

¡Duerme, sombra del muerto; tu sangre te costó; costó la orfandad a tus hijos; pero tu sacrificio será fecundo: NO SERÁ REY DE ESPAÑA!

Y V., señor duque, tenga cuidado de que su familia se esconda, para que ninguno la vea vestida de luto. Porque si la ven, y preguntan a sus hijas: «¿Por quién lleváis luto?» Sus hijas tendrán que responder: «Llevamos luto, porque nuestro padre mató a nuestro tío.»

Y si preguntan a su esposa, su esposa tendrá que decir: «Llevo luto, porque mi marido mató a un primo hermano mío, al hijo de un hermano de mi padre.»

Usted, señor duque, no tiene más recurso que aconsejar al antiguo emigrado que se condene a eterno silencio, oyendo el clamor de su propia conciencia, el clamor de su esposa y de sus hijos, el clamor de su mano derecha, que afina la puntería contra un individuo de su raza. ¡Desdichada ambición! ¡Castigo tremendo!

Usted, señor duque, no tiene más remedio que aconsejar al antiguo emigrado, que busque un retiro, un retiro profundo, aunque por retirado que viva, nunca estará V. solo; porque V. mató a D. Enrique, y no podrá cerrar los ojos sin ver en sueños la frente partida y ensangrentada de aquel padre infeliz.

¡Si, señor duque! Hay una mancha, una mancha de sangre, una mancha eterna, que es la señal con que marca la Providencia a los matadores de su familia, un momento antes de hundirlos en el fondo de las condenaciones sociales.

Pueblo de Madrid, pueblo del año ocho, pueblo del Dos de Mayo, hoy se da sepultura a un español muerto por un francés. Acude con prudencia; acude con orden; acude con respeto. No te llama la sombra de un Borbón; te llama la sombra de sus mártires.

EL MUERTO MATÓ AL VIVO.

SECCION DE NOTICIAS.

Ayer se publicó el primer número de *La voz de la Caridad*, revista quincenal que dirige la señora doña Concepción Arenal, y cuya publicación anunciamos días pasados, recomendándola con la eficacia que merece.

Contiene este primer número muy bellos artículos de dicha señora, y de los Sres. Guertola, Antequera y Segovia, y una carta de D. Fermín Caballero asociándose a los trabajos de la redacción.

El éxito de la publicación ha sobrepasado a las esperanzas que permitía concebir la fidelidad con que el público acoge de ordinario los periódicos no políticos.

Nos complacemos sinceramente con este resultado, porque el pensamiento y objeto de la revista son dignos de todo elogio.

El día 19 de Marzo tendrá lugar la apertura de una escuela católica donde los niños de Santa María, San Ginés y San Nicolás, puedan aprender gratuitamente los elementos de la ciencia y la doctrina santa de Jesucristo.

A la una de la tarde se celebrará, en la parroquia de San Nicolás, una misa rezada con asistencia de los niños, y después de una plática alusiva al acto, que dirá el presbítero D. Jaime Cardona, se dirigirá la comitiva al local de la escuela, en la calle de Luzón, núm. 6.

La Asociación católica de señoras, y en su nombre las consiliares señoras marquesas de Zugasti, doña Concepción de Cafranga y de Pando y doña Francisca Javiera Losada y Miranda, suplican la asistencia a tan piadoso acto.

Por decreto del ministerio de la Gobernación, publicado en la *Gaceta* de ayer, se dispone la adquisición, sin el requisito de subasta, de 1,000 postes telegráficos, por el precio de 16,500 rs. que ha ofrecido entregar D. Casimiro Cienfuegos, vecino de Oviedo, en los almacenes de la Coruña y Rivasdella, donde ha de hacerse el reconocimiento.

El mismo periódico oficial contiene una orden del ministerio de Hacienda, disponiendo que en el adeudo de la perfumería se deduzca el 25 por 100 de tara por razón de todos los envases interiores.

El gobierno portugués, ha dispuesto se abonen los subsidios con arreglo a la ley, a los emigrados señores brigadier Pierrad y teniente coronel D. José Lopez Borreguero.

Los tenedores de las carpetas señaladas con los números 1,864 al 1,993 y 1,994 al 2,111 que comprenden todos los títulos del 3 por 100 consolidado presentados a renovar en los días 10 y 11 del corriente, pueden acudir a la tesorería de la Deuda desde el día de la fecha y siguientes no feriados, a recoger los nuevos títulos de la misma renta que se han emitido en equivalencia.

Igualmente, y desde el citado día, se entregarán por la misma tesorería los nuevos títulos del 3 por 100, expedidos por renovación de los antiguos presentados en las provincias y con las lecturas que se expresan a continuación:

Facturas números 1 al 3 de la provincia de Oviedo.

1 al 15 » Guipúzcoa.

1 al 4 » Navarra.

1 al 15 » Vizcaya.

1 al 13 » Córdoba.

Se recomienda a los tenedores de carpetas de renovación, a quienes se ha llamado por medio de los anuncios publicados hasta el día en los periódicos oficiales y que no han acudido aún a recoger los nuevos títulos, que lo verifiquen cuanto antes; pues existiendo ya en tesorería cantidades de consideración en dicha clase de valores,

res, se pasarán para su custodia al arca de tres llaves en fin del corriente mes, y tendrán entonces sus dueños que sufrir los perjuicios de la demora consiguiente al aviso que deberán dar anticipadamente para que se saquen sus títulos de dicha caja, la cual está dispuesta que solo abra con tal objeto una vez al mes.

Por el ministerio de Ultramar se ha accedido a la puerua que de sus respectivos destinos tenían solicitada D. José Castellanos, alcalde mayor de Pangasinan, en Filipinas, y D. José Fernandez Cañete, que lo es de la segunda alcaldía de Manila.

Desde que se presentó a las Cortes el estado de las tropas mandadas a la isla de Cuba, han salido para aquella Antilla en los diferentes correos, hasta el día de ayer inclusive, más de 2,086 hombres; con lo cual, y con los matriculados de mar, se ha elevado aquel ejército a unos 40,000 hombres.

El sábado tendrá lugar en la capitania general de este distrito consejo de generales para juzgar a un teniente de infantería que abandonó su puesto sin autorización del gobierno.

Ayer estuvieron haciendo ejercicio en la dehesa de los Carabanchales el regimiento de húsares de Pavia, y la brigada de cazadores, al mando del brigadier Búrgos, en las inmediaciones de los Campos Eliseos.

Parece que en el arreglo de la magistratura que firmará hoy el regente hay numerosos cambios, pero pocas cesantías respecto a magistrados y presidentes de sala. La modificación más importante se hace en los regentes y fiscales de audiencias. Pasado mañana empezará la publicación de los nombramientos en la *Gaceta*.

Ayer tarde se reunió la comisión que entiende en el proyecto de ley sobre cesión de dehesas boyales, para firmar el dictamen.

Probablemente se firmará esta semana el tratado consular celebrado entre nuestro gobierno y el de Bélgica.

El gobierno ha concedido ya el permiso para trasladar a Zaragoza desde Ceuta, los restos mortales de la famosa heroína doña Agustina Aragón.

SECCION DE PROVINCIAS.

Según dice *La Patria*, de Vich, ha resultado falsa la noticia que circuló en Barcelona sobre la enfermedad del obispo de Vich, el cual sigue bueno en Roma, y ocupadísimo en asuntos referentes al santo Concilio.

Bajo el lema de *Abajo las quintas*, *La Razon*, periódico barcelonés del 14, inaugura una suscripción para cubrir los gastos que ocasione la manifestación pacífica que tendrá lugar el próximo domingo 20 del actual, compuesta de un representante de todas las agrupaciones republicanas de aquella circunscripción.

El domingo por la tarde se celebró en Zaragoza la anunciada manifestación pidiendo la abolición de quintas. La reunión tuvo lugar en la plaza de toros, donde parece que se reunió bastante gente, y de donde salieron los manifestantes para recorrer varias calles de la ciudad hasta el gobierno de provincia, en cuyas puertas terminó el acto.

Con fecha 15 dicen de Béjar:

«Hoy a las tres de la tarde ha tenido lugar una manifestación contra las quintas. La concurrencia ha sido numerosa, y todo se ha verificado con bastante orden, recorriendo las calles principales de la población. En sus banderas se leían inscripciones propias del objeto: *Amor al trabajo y Abajo las quintas* eran dos de ellas.»

El ayuntamiento de Alicante ha destituido a la junta local de instrucción primaria, y nombrado otra para reemplazarla.

El ayuntamiento en este punto no ha hecho otra cosa que continuar la senda abierta por la diputación, que se atribuyó por autoridad propia la facultad de hacer otro tanto con la junta provincial.

El ayuntamiento, sin embargo, ha faltado a la ley, como faltó la diputación, y como faltó el gobernador de la provincia.

Se ha autorizado a los Sres. Rodriguez Alamau y compañía, de Valencia, para que durante un año puedan estudiar una línea férrea que, partiendo de Teruel y pasando por Ademuz, termine en la proyectada de Cuenca a Valencia.

SECCION EXTRANJERA.

Creemos que nuestros lectores verán con gusto el siguiente artículo que el *Times* del 14 escribe con motivo del terrible suceso del sábado, así como el juicio que el acreditado periódico inglés emite sobre la conducta pasada y presente del duque de Montpensier:

«Tristes son, dice nuestro colega, las nuevas que recibimos de España. El duque de Montpensier ha tenido un lance de honor con el príncipe Enrique de Borbón, y ha herido a su adversario en la cabeza, dejando el muerto en el campo. Los padrinos del príncipe de Orleans eran dos generales del ejército español; los de su adversario dos diputados republicanos. Se dispararon tres tiros por cada parte, y al último cayó muerto el príncipe Enrique. El duque de Montpensier, cuya triste suerte le ha hecho vencedor en este fatal encuentro, dicen que es corto de vista, y que escasamente habrá disparado diez pistoletazos en su vida. Sin embargo, se sabía lo bastante del carácter y de las enconadas aspiraciones de uno y otro para considerar probable una colisión entre ellos.»

Después de enumerar las circunstancias y títulos del infante D. Enrique, añade que desde su matrimonio se enemistó con la corte, y tuvo que exiliarse, llevando oposición al gobierno de la reina hasta el punto de provocar el decreto de Marzo de 1867, por el cual fué exonerado de su dignidad de infante.

«Cuando, a consecuencia de los sucesos de Setiembre, se vio obligada a salir de España la familia real, el príncipe Enrique pidió que se le alzase el destierro, y escribió proclamas incendiarias, en las cuales invitaba a los españoles a proclamar la república, suponiendo que esta clase de gobierno podría utilizar sus servicios en cualquier puesto, sin exceptuar el de presidente.»

«Dirigiéronse principalmente sus ataques al duque de Montpensier, a quien acusó de hipocresía, designándole con el nombre de Cain II, y la animosidad entre ambos príncipes llegó hasta el punto de haber producido hace algunos meses serias provocaciones.»

«Reproducidos los ataques en publicaciones, recientemente no ocasionada una nueva provocación, que ha tenido esta vez muy triste resultado. El duque de Montpensier, como saben nuestros lectores, era, entre los candidatos al trono, uno de los que contaban con más probabilidades de éxito al día siguiente de la revolución, y ha visto después derrotados a sus rivales más temibles, sin que por ello adelantase su causa un solo paso. No estuvo en Madrid el día de la insurrección; no se presentó allí al día siguiente. En un principio pareció ganoso de demostrar que no había tenido parte en el destronamiento de su hermana; más adelante, por el contrario, se manifestó orgulloso por haber contribuido a la catástrofe. Siempre se ha supuesto que ha sembrado de plata su camino al trono,

y que reclamaba con demasiada insistencia de los jefes de la revolución la recompensa pactada a la devolución de su dinero. Es indudable que nada perjudicó tanto a la causa del príncipe de Orleans, como las alternativas de impaciencia y vacilación que caracterizó su conducta desde el principio hasta el fin. Permaneció inactivo en Lisboa cuando era el momento de obrar; hizo alarde de no abrigar pensamientos ambiciosos, reclamando únicamente sus derechos de soldado y de ciudadano español, y sin embargo, nunca se le ocurrió renunciar su rango de capitán general, olvidando que no había recibido esta distinción como militar, sino como miembro de esa misma familia de Borbón, de que ahora se gloribia de ser la víctima más conspicua. Como soldado, no cumplió su deber en Alcolea; como ciudadano, nadie habló de él en las elecciones generales, y solo mucho tiempo después que la Asamblea Constituyente hubiese dado cima a su principal trabajo, consintió en que se le presentase su nombre en una circunscripción oculta del Norte, protestando, empero, contra el celo indiscreto de sus amigos, luego que vio que el éxito no había coronado sus esfuerzos.»

«Después de haberse jactado de la magnanimidad con que había prolongado su destierro para que no se creyese que pretendía influir en las deliberaciones de las Cortes, se presentó de improviso en su palacio de San Telmo; alquiló una casa en Madrid, fué a los baños de Alhama, regresó en seguida, dando lugar con su presencia a los rumores de pronunciamientos y golpes de Estado, y excitando sospechas, que Prim tuvo que desvanecer con la declaración explícita de que la elección de rey no se haría sino por la voluntad nacional, y que exceptuando al almirante Topete, D. Antonio de Borbón (y designó a Montpensier con este patetico dinástico) no tenía un amigo ni un partidario en el gabinete.»

«No nos atrevemos a decir hasta qué punto habrá agriado este nuevo desengaño el ánimo de Montpensier. El *Times* de Prim debía haber sonado en los oídos del príncipe de Orleans, como el tañido de funeral campana, y todo el mundo se preguntaba qué motivo le detenía en Madrid, después que los debates del día 15 le habían colocado en una posición tan difícil.

«Su propósito ha resultado ya evidente, y lo único que resta averiguar es si buscó el mismo la cuestión, o recibió una provocación, de la cual no se atrevió a desentenderse. No nos aventuraremos a decir si las esperanzas de Montpensier ganarán o perderán con este fatal desafío. Son muy distintas las ideas que prevalecen en Europa respecto al Código del honor. En Inglaterra una infracción de la ley, con cualquier pretexto que se cometiera, desacreditaría al que aspirase a ser su representante y guardador. No sabemos lo que el caballeresco pueblo español pensará de estos dos patriotas de régia estirpe, tan ansiosos de derramar su sangre y tan obstinados en su funesto propósito, que no desisten de él a pesar de que dos tiros por cada parte parecían deber satisfacer las exigencias del más exagerado pundonor.»

Los periódicos de París que hoy recibimos no contienen noticias de gran interés: casi todos consagran sus columnas a dar cuenta de los últimos momentos del conde de Montalembert y hacer el panegírico del ilustre escritor. Gravemente enfermo hace mucho tiempo, en los últimos días había experimentado varias crisis de las que parecía haber escapado felizmente. La víspera de su muerte pasó la noche rodeado de su familia, y su presencia de ánimo, así como la viveza de su conversación, alejaban todo presentimiento de que estuviera próxima una desgracia.

Escribió varias cartas de su puño y letra, y la noche fué mucho más tranquila que las anteriores: por la mañana, al despertarse, se encontraba tan bien que no quiso tomar los medicamentos que le ofrecía la hermana de la caridad especialmente encargada de asistirle. Pidió de almorzar: a los pocos momentos se llevó las manos al pecho, y exclamó: «Ay, hermana, cuánto sufro!» en seguida perdió el conocimiento. El cura de Santo Tomás de Aquino, llamado a toda prisa, le administró los últimos sacramentos; pero el ilustre enfermo no recobró el sentido. La crisis fué tan fulminante, que ni aun le dejó tiempo para bendecir a sus hijos. A las ocho y media todo había concluido.

Ocupándose de este célebre personaje, dice *La France*, «que vida tan noble y hermosa! A nadie ha podido aplicarse con más justicia el dicho que M. Chateaubriand se aplicaba a sí mismo, de que las grandes líneas de su existencia nunca se habían doblado. Hubo en su carrera, muchas agitaciones, muchos movimientos bruscos; pero las convicciones liberales y religiosas de su juventud se han conservado inalterables en su edad madura. Su muerte crea un vacío que no se llenará, porque entre sus contemporáneos más ilustres ocupaba un lugar preeminente.»

La comisión de obras públicas se reunió la semana última bajo la presidencia del marqués de Talhoet, dividiéndose en *incontinenti* en dos secciones, una que presidirá el ex-ministro M. Béhic, que se ocupará de toda clase de obras públicas que no sean caminos de hierro; otra bajo la presidencia de M. Grenier, que examinará todas las cuestiones relativas a la construcción y explotación de los ferro-carriles.

El lunes se reunieron los diputados de la izquierda en la calle de la Sourdiere: presidió M. Grevy; aun cuando concurren casi todos los diputados de la oposición, no se adoptó resolución ninguna que pueda ejercer grande influencia en la marcha de los trabajos parlamentarios: se examinaron los proyectos de ley presentados a la Cámara, y se convino en adoptar y sostener en las sesiones aquellos que pudieran proporcionar a la izquierda ocasión de desenvolver los puntos principales de su programa; en cambio se sacrificaron sin piedad los que solo tenían por objeto poner en relieve la personalidad de sus autores.

Continúa la agitación en Irlanda: las prisiones verificadas en Waterford y en Tipperary a consecuencia de los desórdenes ocurridos en estas localidades, mantienen una sorda inquietud en los grandes centros de población.

Correspondencias de Dublin aseguran que apenas fué conocido en Irlanda el voto de la cámara de los Comunes autorizando por una inmensa mayoría la segunda lectura del bill territorial, los agitadores fenianos provocaron reuniones particulares preparatorias de un *meeting* general. La opinión predominante en la isla es que la reforma será insuficiente, y no aprovechará sino a los propietarios o a un pequeño número de trabajadores que posean el capital suficiente para emprender la explotación de nuevas fincas.

En cuanto al éxito alcanzado por el ministerio Gladstone, no falta quien suponga que es más aparente que sólido. ¿Por qué han votado los *Tories* con los *Whigs*? Porque tenían una reforma más radical, y que se pretexto de remediar un mal se atentase al principio mismo de la propiedad.

Las demás noticias del extranjero carecen de interés.

El Dr. Richardson ha comenzado en Londres a dar una serie de lecciones sobre la muerte por el cloroformo. En atención a las frecuentes desgracias de este género que refiere la prensa inglesa, no puede haber elegido asunto más oportuno para recordar a los facultativos de su país la prudencia y la circunspección. Richardson calcula que sucumben un individuo por cada 1,500 cloroformizaciones, en el caso de que se practiquen con habilidad e inteligencia.

París 16.

El Nuncio del Papa ha celebrado hoy una conferencia con el conde Daru, ministro de los Negocios extranjeros; no ha sido posible todavía averiguar cuál ha sido el verdadero objeto de la conferencia, pero creése que esta se relaciona con las exigencias del gobierno francés relativamente a las desiciones del Concilio.

Después de las conferencias, el ministro ha ido a las Tuilerías. El emperador no ha presidido hoy el Consejo, con motivo del aniversario del nacimiento del príncipe imperial.

Anoche en una recepción del ministro Emilio Olivier, se aseguraba que los rumores sobre disensiones en el seno del gabinete carecían de todo fundamento.

Viena 16.

La nueva ley electoral preparada por el gobierno propone la incompatibilidad absoluta entre el cargo de diputado y todo empleo público, e impone la obligación de cumplir con todos los deberes de la diputación, y especialmente con la exactitud en las sesiones.

CORTES CONSTITUYENTES.

Extracto de la sesión celebrada el día 16 de Marzo de 1870.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR RUIZ ZORRILLA.

Abierta la sesión a las tres, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Dos señores diputados presentaron exposiciones. El Sr. FUENTE ALCÁZAR apoyó una proposición para que los bienes del hospital de Santiago en Cuenca, sean administrados por aquella diputación provincial.

Continuó el debate acerca de la ley de reemplazo del ejército.

El Sr. CERVERA continuó su interrumpido discurso en contra del dictamen de la comisión.

El orador censuró en su largo discurso la organización actual del ejército, calificándola de sumamente defectuosa y perjudicial para soldados y oficiales, siendo susceptible de grandes reformas suprimiendo inveterados abusos.

Terminó pidiendo que se economizase la vida de los hombres y el presupuesto de la Guerra, pues solo así podría fomentarse la riqueza del país.

El señor ministro de la GUERRA contestó al señor Cervera, diciéndole que sus datos son incorrectos: que el soldado está por regla general mejor en el ejército que en su casa, pues como mejor viste mejor y está mejor cuidado que en su casa, y la mortandad no pasa del 2 al 3 por 100.

En cuanto a la alimentación del soldado, bastaba probar el rancho para comprender que era sana y sustanciosa.

El orador pidió asegurar que algún día ha pedido un plato de rancho en la guardia del ministerio, y lo comió con gusto.

Otro tanto sucedía con el pan, del cual comía él y su familia diariamente, porque hacía que le llevasen muestras del que se daba al soldado activo y al enfermo en los hospitales.

Si se añadía a todo esto el vestido aseado y conveniente, resultaba que el soldado estaba mejor que tantos otros pobres trabajadores, como pasan el día en sus talleres, y apenas si comen más que pan, y visten mal y duermen sobre una tarima.

Respecto a lo que se había dicho de que los generales no querían soldados voluntarios, declaró que era incorrecto, porque lo que todos desean es que haya voluntarios para el reemplazo, con lo cual se tendrían soldados mejores que ahora, si es que mejores los podía haber, toda vez que se engancharían por ocho o diez años, y no resultaría como ahora, que cuando el soldado empieza a servir hay que darle la licencia.

Pero no es que no quieren los voluntarios, sino que no se presentan, porque en España no había espíritu militar.

Siendo necesario el ejército y habiendo de re